DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1974/2021-CR, 2261/2021-CR, 3841/2022-CR, 4046/2022-CR, 4522/2022-CR, 5429/2023-CR, 5602/2022-CR, 5697/2023-CR, 6002/2023-CR, 6011/2023-CR, 6013/2023-CR, 6041/2023-CR, 6156/2023-CR, 6157/2023-CR, 6405/2023-CR, 6483/2023-CR, 6484/2023-CR, 6631/2023-CR, 7077/2023-CR, 7412/2023-CR Y 8066/2023-CR, LEY QUE MODIFICA LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA FORTALECER SU APLICACIÓN Y EFICACIA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
28 NOV. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:18

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
Período Anual de Sesiones 2024-2025

Señor presidente:

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento los siguientes proyectos de ley:

1. Proyecto de ley **1974/2021-CR**, Ley que modifica la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1416.
2. Proyecto de ley **2261/2021-CR**, Ley que promueve la publicidad de las actas de sesión de los órganos colegiados de la administración pública.
3. Proyecto de ley **3841/2022-CR**, Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, para promover el fortalecimiento de la labor de fiscalización en los gobiernos locales y regionales.
4. Proyecto de ley **4046/2022-CR**, Ley que fortalece la transparencia en el sector salud.
5. Proyecto de ley **4522/2022-CR**, Ley que impone suspensión del cargo a los regionales y gobiernos locales por incumplimiento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6. Proyecto de ley **5429/2022-CR,** Ley que garantiza el acceso a la información de pueblos indígenas u originarios.
7. Proyecto de ley **5602/2022-CR**, Ley de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública por la ciudadanía para combatir la corrupción y fomentar un gobierno de datos abiertos.
8. Proyecto de ley **5697/2023-CR**, Ley que fortalece la transparencia y los mecanismos de control social para garantizar la idoneidad académica de los altos funcionarios del estado y otros funcionarios y servidores públicos.
9. Proyecto de ley **6002/2023-CR**, Ley que facilita la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología.
10. Proyecto de ley **6011/2023-CR**, Ley que facilita la solicitud verbal para el acceso a la información pública por el ciudadano.
11. Proyecto de ley **6013/2023-CR**, Ley que precisa la entrega virtual de la información pública cuando se solicita expresamente.
12. Proyecto de ley **6041/2023-CR**, Ley que precisa la no firma de abogado para la apelación administrativa en la solicitud de información pública.
13. Proyecto de ley **6156/2023-CR**, Ley que precisa la no firma de abogado para la solicitud de acceso a la información pública en primera instancia administrativa.

14. Proyecto de ley **6157/2023-CR**, Ley que precisa la gratuidad de la información pública cuando se solicita su remisión de forma virtual.
15. Proyecto de ley **6405/2023-CR**, Ley que garantiza el derecho de acceso a la información considerando la diversidad cultural del país.
16. Proyecto de ley **6483/2023-CR**, Ley que convierte a las carpetas fiscales y expedientes judiciales en información pública cuando están en etapa de juicio oral.
17. Proyecto de ley **6484/2023-CR**, Ley que precisa el valor comercial de la reproducción de la información pública.
18. Proyecto de ley **6631/2023-CR,** Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al plazo adicional para la entrega de información.
19. Proyecto de ley **7077/2023-CR**, Ley que incorpora el literal g) al artículo 16 del Texto Único Ordenado de la ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
20. Proyecto de ley **7412/2023-CR**, Ley que obliga la entrega de información pública en lengua originaria.
21. Proyecto de ley **8066/2023-CR**, Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de regular el acceso a la información confidencial de la administración pública y costos de reproducción de la información requerida.

El presente dictamen fue aprobado por **MAYORÍA** en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 19 de noviembre de 2024, con el voto a **favor** de los congresistas: Rospigliosi Capurro, Fernando Miguel; Aragón Carreño, Luis Ángel; Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio; Juárez Gallegos, Carmen Patricia; Moyano Delgado, Martha Lupe; Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso; Elías Ávalos, José Luis; Calle Lobatón, Digna; Juárez Calle, Heidy Lisbeth; Cerrón Rojas, Waldemar José; Mita Alanoca, Isaac; Muñante Barrios, Alejandro; Herrera Medina, Noelia Rossvith; Soto Palacios, Wilson; Paredes Gonzáles, Alex Antonio; Quiroz Barboza, Segundo Teodomiro; Williams Zapata, José Daniel; Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina; Cutipa Ccama Víctor Raúl; Flores Ramírez, Alex Randu; Echaíz de Núñez Izaga, Gladys Margot; Luque Ibarra, Ruth; Tello Montes, Nivardo Edgar congresista accesitario en reemplazo del congresista titular Luna Gálvez, José León; con ningún voto en **contra**; con el voto en **abstención** de los congresistas: Balcázar Zelada, José María; Valer Pinto, Héctor; Morante Figari, Jorge Alberto.

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1 El proyecto de ley **1974/2021-CR**, Ley que modifica la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N.º 1416, fue presentado por el congresista Guido Bellido Ugarte, del grupo parlamentario Perú Libre, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 9 de mayo de 2022. Fue decretado el 10 de mayo de 2022 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.2 El proyecto de ley **2261/2021-CR**, Ley que promueve la publicidad de las actas de sesión de los órganos colegiados de la administración pública, fue presentado por el congresista Guido Bellido Ugarte, del grupo parlamentario Perú Libre, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 02 de junio de 2022. Fue decretado el 08 de junio de 2022 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.3 El proyecto de ley **3841/2022-CR,** Ley que promueve la transparencia y fortalece la labor de fiscalización en los gobiernos locales y regionales, fue presentado por la congresista Lady Camones Soriano, del grupo parlamentario Alianza por el Progreso, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 27 de diciembre de 2022. Fue decretado el 28 de diciembre de 2022 a la Comisión de Constitución y Reglamento como primera comisión, y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión, para su estudio y dictamen.

1.4 El proyecto de ley **4046/2022-CR**, Ley que fortalece la transparencia en el sector salud, fue presentado por el congresista George Málaga Trillo, no agrupado, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 24 de enero de 2023. Fue decretado el 25 de enero de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión, y el 02 de mayo de 2023, mediante acuerdo del Consejo Directivo se decretó a la Comisión de Salud como segunda comisión, para su estudio y dictamen.

1.5 El proyecto de ley **4522/2022-CR**, Ley que impone suspensión del cargo a los regionales y gobiernos locales por incumplimiento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue presentado por el congresista Paul Gutiérrez Ticona, del grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 20 de marzo de 2023, y fue decretado el 22 de marzo de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento como primera comisión, y a la Comisión de

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, como segunda comisión, para su estudio y dictamen.

1.6 El proyecto de ley **5429/2022-CR**, Ley que garantiza el acceso a la información de pueblos indígenas u originarios, fue presentado por la congresista Ruth Luque Ibarra, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 21 de junio de 2023. Fue decretado el 23 de junio de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento como primera comisión, y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como segunda comisión, para su estudio y dictamen.

1.7 El proyecto de ley **5602/2022-CR,** Ley de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública por la ciudadanía para combatir la corrupción y fomentar un gobierno de datos abiertos, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, no agrupada, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 20 de julio de 2023. Fue decretado el 24 de julio de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.8 El proyecto de ley **5697/2023-CR**, Ley que fortalece la transparencia y los mecanismos de control social para garantizar la idoneidad académica de los altos funcionarios del estado y otros funcionarios y servidores públicos, fue presentado por la congresista Susel Paredes Piqué, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 11 de agosto de 2023. Fue decretado el 15 de agosto de 2023, a la Comisión de Constitución y Reglamento como primera comisión, y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, como segunda comisión, para su estudio y dictamen.

1.9 El proyecto de ley **6002/2023-CR**, Ley que facilita la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 25 de setiembre de 2023. Fue decretado el 26 de setiembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.10 El proyecto de Ley **6011/2023-CR**, Ley que facilita la solicitud verbal para el acceso a la información pública por el ciudadano, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante

el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 26 de setiembre de 2023. Fue decretado el 27 de setiembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.11 El proyecto de ley **6013/2023-CR**, Ley que precisa la entrega virtual de la información pública cuando se solicita expresamente, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 26 de setiembre de 2023. Fue decretado el 27 de setiembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.12 El proyecto de ley **6041/2023-CR**, Ley que precisa la no firma de abogado para la apelación administrativa en la solicitud de información pública, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 02 de octubre de 2023. Fue decretado el 03 de octubre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.13 El proyecto de ley **6156/2023-CR**, Ley que precisa la no firma de abogado para la solicitud de acceso a la información pública en primera instancia administrativa, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 17 de octubre de 2023. Fue decretado el 18 de octubre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.14 El proyecto de ley **6157/2023-CR**, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al plazo adicional para la entrega de información, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 17 de octubre de 2023. Fue decretado el 18 de octubre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.15 El proyecto de ley **6405/2023-CR**, Ley que garantiza el derecho de acceso a la información considerando la diversidad cultural del país, fue presentado por la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, del grupo parlamentario Perú Libre, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 14 de noviembre

de 2023. Fue decretado el 15 de noviembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.16El proyecto de ley **6483/2023-CR**, Ley que convierte a las carpetas fiscales y expedientes judiciales en información pública cuando están en etapa de juicio oral, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 22 de noviembre de 2023. Fue decretado el 23 de noviembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.17El proyecto de ley **6484/2023-CR**, Ley que precisa el valor comercial de la reproducción de la información pública, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 22 de noviembre de 2023. Fue decretado el 23 de noviembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.18El proyecto de ley **6631/2023-CR**, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al plazo adicional para la entrega de información, fue presentado por el congresista Roberto Sánchez Palomino, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 12 de diciembre de 2023. Fue decretado el 14 de diciembre de 2023 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.19El proyecto de ley **7077/2023-CR**, Ley que incorpora el literal g) al artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 021-2019-JUS, fue presentado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, no agrupado, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 20 de febrero de 2024. Fue decretado el 21 de febrero de 2024 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.20El proyecto de ley **7412/2023-CR**, Ley que obliga la entrega de información pública en lengua originaria, fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, no agrupada, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el

01 de abril de 2024. Fue decretado el 04 de abril de 2024 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio y dictamen.

1.21 El proyecto de ley **8066/2023-CR**, Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de regular el acceso a la información confidencial de la administración pública y costos de reproducción de la información requerida, fue presentado por la congresista Susel Paredes Piqué, del grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República el 05 de junio de 2024. Fue decretado el 06 de junio de 2024 a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión para su estudio dictamen.

ACUMULACIÓN: Las veintiún propuestas legislativas se han acumulado por existir afinidad en lo concerniente a la problemática identificada, objetivo y fin que pretenden lograr. Así se explica en el acápite correspondiente al análisis técnico del presente dictamen.

II. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

2. 1. Proyectos normativos sobre modificación de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Cuadro 1
Antecedentes legislativos 2000 a 2006
Proyectos de Ley que modifican la Ley 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

N.°	PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
1	12266/2004-CR	Ley de Transparencia en el cobro a usuarios de tasas por concepto de derechos administrativos por servicios del Estado.	Propone establecer las normas a las que deben sujetarse obligatoriamente todas las entidades públicas para el cobro de tasas por concepto de derechos administrativos.	Archivo
2	11458/2004-CR	Ley que establece la obligación de todas las entidades de la Administración Pública de informar de la contratación de personal bajo	Propone modificar el inciso 3 del artículo 5° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a establecer la obligación de todas las entidades de la Administración Pública de informar de la	Archivo

		la modalidad "servicios no personales".	contratación de personal bajo la modalidad de servicios no personales.	
3	10551/2003-CR	Ley que modifica los artículo 4°, 6° y 14° de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N.° 27806.	Propone modificar diversos artículos de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 4°,"Responsabilidades y sanciones"; 6°,"De los plazos de la implementación" y 14°,"Responsabilidades".	Archivo
4	10487/2003-CR	Ley que incorpora segundo párrafo al artículo 2° y quinto numeral del artículo 5° de la Ley N.° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Propone modificar los artículos 2° y 5° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referentes a las entidades de la administración pública y publicación en los portales de las dependencias, respectivamente.	Archivo
5	10292/2003-CR	Ley que modifica el inciso b) del artículo 11 de la Ley 27806, referente al procedimiento para el acceso a la información.	Propone modificar el inciso b) del artículo 11° de la Ley núm. 27806, referente al procedimiento para el acceso a la información.	Archivo
6	07529/2002-CR	Ley que establece la obligación, a congresistas, ministros de estado, presidentes regionales y alcaldes provinciales, para presentarse durante 30 minutos cada 60 días en los medios de comunicación del estado para dar cuenta de su gestión.	Propone incorporar el artículo 5º- A y modifica la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los cuales quedan redactados con el texto siguiente: "A. Obligación de las autoridades electas por el voto popular y designadas como ministros de Estado a informar sobre su gestión".	Archivo
7	05702/2002-CR	Ley que modifica la ley de transparencia y acceso a la información pública relativa a la información de los gobiernos locales.	Propone modificar el artículo 5° de la Ley 27927, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la publicación de los portales de las dependencias públicas.	Dictamen Negativo Archivo
8	05358/2002-CR	Ley que modifica el artículo 17° de la Ley de N.° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el artículo 17° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la tasa aplicable.	Archivo

9	04701/2002-CR	Modificase el artículo 6° de la ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.	Propone modificar el artículo 6° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los plazos de implementación en la Internet.	Dictamen Negativo Archivo
10	04541/2002-CR	Ley que incluye el Título V a la Ley N° 27806 (Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información)	Propone incluir el Título V a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la publicación y actualización de la legislación nacional.	Dictamen Negativo Archivo
11	04363/2002-CR	Ley que propone modificar la Ley de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información.	Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 2°, "Entidades de la Administración Pública" y 15°,"Excepciones al ejercicio del derecho".	Ley 27927 (04.02.2003)
12	04005/2002-CR	Ley que modifica la Ley 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Ley 27927 (04.02.2003)
13	03977/2002-CR	Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el artículo 16° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la información parcial.	Ley 27927 (04.02.2003)
14	03818/2002-CR	Ley que propone modificar los artículos 2°, 4° y 15° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar diversos artículos de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública: 2°,"Las Fuerzas Armadas responden a las solicitudes de información a través de la Comandancia General"; 4°,"Autoridades de la Administración Pública" y 15°,"Información clasificada como secreta".	Ley 27927 (04.02.2003)
15	03797/2002-CR	Ley que modifica el artículo 2 y el artículo 15 a) de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el artículo 2° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se refiere a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deben responder a las solicitudes de información a través de cada una de sus oficinas o dependencias respectivas, de manera descentralizada.	Ley 27927 (04.02.2003)
16	03756/2002-CR	Ley que modifica la Ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Propone modificar el inciso a) del artículo 15° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual se refiere a las excepciones al ejercicio del derecho.	Ley 27927 (04.02.2003)

17	03666/2002-CR	Ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Propone modificar varios artículos de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:2°,"incluye a las fuerzas armadas y la policía nacional como entidades de la administración pública"; 5°,"publicación en los portales de dependencias públicas"; 6°,"plazos de implementación"; 9°,"personas jurídicas sujetas al régimen privado"; 15°,"excepciones al ejercicio del derecho".	Ley 27927 (04.02.2003)
18	03571/2002-CR	Ley que modifica los artículos 2°, 6° y 15 de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Propone la modificatoria de los siguientes artículos de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información: 2º,"Entidades de la Administración Pública"; 6º,"De los plazos de implementación"; 15º,"Excepciones al ejercicio del derecho".	Ley 27927 (04.02.2003)
19	03513/2002-CR	Propone modificaciones a la Ley 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Propone modificar diversos artículos de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Ley 27927 (04.02.2003)

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

Cuadro 2
Antecedentes legislativos 2006 a 2011
Proyectos de Ley que modifican la Ley 27806
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

N.°	PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
1	3647/2009-CR	Ley que modifica el artículo 5° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806.	Propone modificar el artículo 5° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la publicación de los contratos de concesión de nuestro recursos naturales, renovables y no renovables, debiendo además la entidad responsable publicar dicho contrato en el diario oficial "El Peruano".	Archivo
2	03542/2009-CR	Ley que modifica el artículo 17° de la Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria Ley N° 27927.	Propone modificar el artículo 17° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la tasa aplicable por la información requerida.	Archivo

3	03166/2008-CR	Ley que modifica el numeral 2 y último párrafo del artículo 5° y el numeral 2 del artículo 22° de la Ley N° 27806 modificado por la Ley N° 27927-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar los artículos 5° y 22° de la Ley N° 27806, modificado por la Ley N° 27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a mejorar el nivel de transparencia en el manejo de los recursos fiscales.	Archivo
4	01242/2006-CR	Ley que modifica el artículo 15-C de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el artículo 15°-C de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la Regulación de la Excepciones.	Archivo
5	0797/2006-CR	Ley que propone transparencia en el ingreso y cese del personal en las entidades de la Administración Pública.	Propone modificar el artículo 5° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de proponer transparencia en el ingreso y cese del personal en las entidades de la Administración Pública.	Archivo
6	0657/2006-CR	Ley que modifica el TUO de la Ley N° 27806 y crea el Sistema de Seguimiento de Trámites Administrativos.	Propone agregar el inciso 6 al artículo 5° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a publicación en los portales de las dependencias públicas y crear el Sistema de Seguimiento de Trámites Administrativos.	Archivo
7	0361/2006-CR	Ley que modifica los alcances de los artículo 3°, 10°, 11 de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información.	Propone modificar los artículos 3°, 10° y 11° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, principio de publicidad, información de acceso público y procedimiento, respectivamente.	Archivo

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

Cuadro 3
Antecedentes legislativos 2011 a 2016
Proyectos de Ley que modifican la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

N.°	PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
1	03819/2014-CR	Ley que regula el Sistema Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.	Propone regular el Sistema Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, Ley 27806.	Archivo

2	03515/2013-CR	Ley que modifica los artículos 15, 15-A, 15-B y 15-C de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar los artículos 15, 15-A, 15-B y 15-C de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Archivo
3	01260/2011-CR	Ley que modifica el artículo 5° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Archivo
4	0601-2011-CR	Ley que modifica la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para identificar el cumplimiento del 3% de contratación de trabajadores con discapacidad.	Propone modificar el artículo 5° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para identificar el cumplimiento del 3% de contratación de trabajadores con discapacidad.	Ley 29973 (24.12.2012)

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

Cuadro 4
Antecedentes legislativos 2016 a 2021
Proyectos de Ley que modifican la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

N.°	PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
1	04578/2018-CR	Ley que modifica la Ley 27806 y crea el Sistema Integrado de Declaración de Intereses del Poder Judicial y Ministerio Público	Propone modificar la Ley 27806 y crea el Sistema Integrado de Declaración de Intereses del Poder Judicial y Ministerio Público.	Archivo
2	03163/2018-PE	Ley que incorpora el Título VI "Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura", al T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.	Propone Ley que incorpora el Título VI "Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura", al T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Ley 30934 (24.04.2019)
	02804/2017-CR	Ley que modifica el artículo 12, 22, 26 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y	Propone modificar el artículo 12, artículo 22 incorporando el inciso 6) y el artículo 26, de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asimismo tiene por	Archivo

3		Acceso a la Información Pública	finalidad primordial mantener informada a la población de manera transparente, continua y oportuna, siendo obligatoria la difusión de la información y sus gastos por parte de las Entidades de la Administración Pública .	
4	02404/2017-CR	Ley que propone modificar la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar el acceso a información relevante para la lucha contra la corrupción.	Propone garantizar el acceso ciudadano a información relevante para la lucha contra la corrupción a través de los Portales de Transparencia de las Entidades de la Administración Pública, ampliando el alcance de la información que éstas deben contener y definiendo las responsabilidades referentes al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Archivo
5	00591/2016-CR	Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Propone modificar el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Archivo
6	00248/2016-CR	Ley que modifica el artículo 5° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es conocer la información del personal que ingresa y cesa en una entidad de la administración pública, en cualquiera de sus modalidades.	Archivo

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

Cuadro 5
Antecedentes legislativos 2021 a 2026
Proyectos de Ley que modifican la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

N.°	PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
1	03642/2022-CR	Ley que fortalece la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia estándar de las entidades públicas	Propone modificar la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de fortalecer la implementación, actualización y supervisión de los portales de transparencia de las entidades de la Administración Pública, de conformidad con la política nacional en materia de transparencia activa.	Ley 31783 (13.06.2023)

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.2. Opiniones solicitadas y recibidas

Para el estudio y dictamen de los presentes proyectos normativos, se solicitaron las siguientes opiniones

2.2.1. Opiniones solicitadas respecto de los Proyectos de Ley

Proyecto de Ley N° 1974/2021-CR[1]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 1974/2021-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 6
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 1974/2021-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1178-2021-2022-CCR/CR	FÉLIX CHERO MEDINA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	30/05/2022
2	1179-2021-2022-CCR/CR	ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ Presidente del Consejo de Ministros	30/05/2022
3	1180-2021-2022-CCR/CR	EDUARDO LUNA CERVANTES Director de la Autoridad Nacional de Transparencia	30/05/2022
4	1181-2021-2022-CCR/CR	DINO CARLOS CARO CORIA Presidente de la Asociación Peruana de la Compliance	30/05/2022
5	2029-2022-2023-CCR/CR	ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS Defensora del Pueblo (e)	10/02/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 1974/2021-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

[1] Expediente virtual del proyecto de ley 1974/2021-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1974

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D001388-2022-PCM-SG, de fecha 14 de junio de 2022, remite el Informe N.° D000813-2022-PCM-OGAJ, de fecha 06 de junio de 2022, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica que analiza el Proyecto de Ley N° 01974/2021-CR, que propone la modificación del literal e) del artículo 11 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de ampliar el plazo para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y establecer que, en caso de silencio administrativo negativo, el recurso puede ser presentado sin límite temporal.

En el análisis, la PCM señala que la función de emitir opiniones sobre proyectos de ley relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública recae, conforme al marco normativo, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y no en la PCM. En ese sentido considera que no le corresponde emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 01974/2021-CR por no ser de su competencia.

- **Ministerio de Justicia**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 1178-2021-2022-CCR/CR, de fecha 17 de junio de 2022, remite el Informe Jurídico N° 09-2022-JUS/DGTAIPD, de fecha 08 de junio de 2022, emitido por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que analiza el Proyecto de Ley N° 1974/2021-CR, el cual propone modificar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en aspectos relacionados con los plazos y procedimientos para interponer recursos de apelación.

Al respecto, el MINJUS identifica incoherencias entre el título del proyecto y el contenido normativo, recomendando que se ajuste el título para reflejar claramente las modificaciones propuestas, en cumplimiento de la técnica legislativa y la seguridad jurídica. Sobre los plazos para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), siendo que el proyecto sugiere cambiar de 15 días calendario a 15 días hábiles, el Ministerio de Justicia lo considera innecesario, dado que el precedente administrativo ya estableció que el plazo aplicable es de 15 días hábiles. En cuanto el acogimiento al silencio administrativo negativo para apelar indefinidamente en cuando existe ausencia de respuesta por parte de la entidad pública, y aunque este criterio ya ha sido adoptado en la jurisprudencia, señala viable su positivización.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0161-2023-DP/PAD, de fecha 17 de marzo de 2023, emite una opinión técnica sobre el proyecto de ley 1974/2021-CR, que pretende modificar la única disposición complementaria del Decreto Legislativo 1416, que regula el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).

Al respecto, la Defensoría observa que el objetivo principal del proyecto es enmendar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no su norma modificatoria, como se indica en el proyecto. Precisa que las modificaciones propuestas buscan aclarar que el plazo para apelar debe computarse en días hábiles y establecer que, en ausencia de respuesta de la entidad mediante el silencio administrativo negativo, el administrado no tiene un plazo para interponer apelación.

Asimismo, la Defensoría señala que ambas propuestas han sido interpretadas y aplicadas por la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el TTAIP en favor de los administrados, con base en precedentes administrativos y la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. No obstante, considera que el proyecto de ley es viable, ya que contribuiría a fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de la ciudadanía, promoviendo la transparencia y el respeto de los derechos de acceso a la información.

Proyecto de Ley 2261/2022-CR[2]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 2261/2021-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 7
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 2261/2021-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1330-2021-2022-CCR/CR	NELSON SHACK YALTA Contralor General de la República	28/05/2022
2	1331-2021-2022-CCR/CR	FÉLIX CHERO MEDINA Ministro de Justicia y Derechos humanos	28/05/2022

[2] Expediente virtual del proyecto de ley 2261/2021-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2261

3	1332-2021-2022-CCR/CR	ADRIANA URRUTIA POZZI-ESCOT Presidenta de la Asociación Civil Transparencia	28/05/2022
4	1333-2021-2022-CCR/CR	ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS Defensora del Pueblo (e)	28/05/2022
5	1334-2021-2022-CCR/CR	JUAN CARLOS MORÓN URBINA Especialista en Derecho Administrativo	28/05/2022

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 2261/2021-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Ministerio de Justicia**

La Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 125-2023-JUS/SG, de fecha 12 de enero de 2023, remite el Informe Legal N.° 346-2022-JUS/DGDNCR, de fecha 02 de diciembre de 2002, emitido por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, que analiza el proyecto de ley N° 2261/2021-CR, que modifica los artículos 5 de la Ley, 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), estableciendo la obligatoriedad de esta publicación, salvo cuando contenga información clasificada como secreta, reservada o confidencial.

El MINJUS señala que, si bien el proyecto es viable en términos de fondo, presenta observaciones de técnica legislativa y calidad normativa. En particular, el título de la propuesta debería indicar explícitamente las leyes que modifica. Asimismo, considera que la exposición de motivos no cumple con el análisis detallado de los impactos cualitativos y cuantitativos de la medida, ni con la justificación técnica suficiente para la publicación de dichas actas. Sumado a ello sugiere corregir la referencia en la modificación propuesta al artículo 113 de la Ley 27444 y no a su Texto Único Ordenado, y recomienda que se revise el proyecto para mejorar su calidad normativa.

- **Contraloría General de la República**

El Contralor General de la República (CGR), mediante el Oficio N.° 0002087-2022-CG/DC, de fecha 20 de diciembre de 2022, remite un documento Anexo, en el que señala que el proyecto de ley 2261/2021-CR, plantea modificar el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 113 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre

la difusión de información efectuada por internet a través de los portales de las dependencias públicas y el marco normativo de las actas de sesión.

Al respecto, la CGR señala que la iniciativa legal no contiene aspectos que se encuentren dentro de sus atribuciones y competencias; asimismo, no consigna encargo alguno a esa entidad ni a sus órganos, motivo por el cual no emite opinión.

Proyecto de Ley 3841/2022-CR[3]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 3841/2022-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 8
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 3841/2022-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1410-2022-2023-CCR/CR	ÁLVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO Presidente de la Asociación de Municipalidades	04/01/2023
2	1411-2022-2023-CCR/CR	JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-ANGR	04/01/2023
3	1412-2022-2023-CCR/CR	ADRIANA URRUTIA POZZI – ESCOT Presidenta de Transparencia Perú	04/01/2023
4	1413-2022-2023-CCR/CR	JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO Ministro de Justicia y Derechos Humanos	04/01/2023
5	1414-2022-2023-CCR/CR	ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS Defensora del Pueblo (e)	04/01/2023
6	1415-2022-2023-CCR/CR	SILVIA VANESA VERA MUENTE Presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	04/01/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

[3] Expediente virtual del proyecto de ley 3841/2021-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3841

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 3841/2022-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0028-2023-DP/PAD, de fecha 16 de enero de 2023, emite opinión sobre el proyecto de ley 03841/2022-CR que propone modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Gobiernos Regionales, con el fin de transferir las responsabilidades del Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública (FRAI) a los alcaldes y gobernadores regionales.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que esta modificación puede ser innecesaria, por cuanto los consejeros y regidores ya cuentan con facultades para solicitar dicha información en el marco de su labor de supervisión, sin necesidad de recurrir a la Ley 27806. Asimismo, la Defensoría considera inadecuada la medida de incluir sanciones de suspensión para las autoridades electas que no cumplan con la entrega de información, al precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado que las solicitudes de información de los regidores no son un derecho fundamental, sino una prerrogativa inherente a su cargo. Esta interpretación legal indica que el régimen sancionador de la Ley de Transparencia no debería aplicarse en el contexto de la fiscalización, ya que los pedidos de información de los regidores y consejeros deben entenderse como facultades de supervisión propias de su función y no como un derecho ciudadano de acceso a la información. En consecuencia, opina que la propuesta legislativa no resulta viable y sugiere revisar las normativas pertinentes para precisar las responsabilidades de los alcaldes y gobernadores en cuanto a la entrega de información a consejeros y regidores.

- **Ministerio de Justicia**

La Presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el **Oficio N.° 0001-2023-JUS/TTAIP-PRESIDENCIA**, de fecha 24 de enero de 2023, remite el Informe N.° 006 -2023-JUS-TTAIP, de fecha 23 de enero de 2023, emitido por la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre el proyecto de ley 3841/2022-CR, que propone modificar las normas de transparencia para fortalecer la fiscalización en los gobiernos locales y regionales. Este proyecto de ley pretende imponer sanciones a los alcaldes y gobernadores regionales que incumplan con la entrega de información requerida, incluyendo la suspensión temporal del cargo.

Al respecto, la Secretaría Técnica señala que las actuales leyes ya prevén mecanismos de sanción y que el proyecto podría redundar en sanciones duplicadas. Argumenta que los regidores y consejeros ya cuentan con facultades establecidas para solicitar información en el ejercicio de su función fiscalizadora, reguladas por el numeral 7 del artículo 10 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el literal e) del artículo 16 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Además, precisa que el Tribunal Constitucional ha reafirmado, en las sentencias recaídas en los Exp. N° 0554-2010-PHD/TC, Exp. N° 2681-2009-HD/TC, Exp. N° 00566-2010- PHD/TC, Exp. N° 04865-2013-PHD/TC y Exp. Nº 00007-3003-AI/TC, que estos funcionarios ejercen su labor de fiscalización como prerrogativas de sus cargos y no como derechos individuales de acceso a la información pública.

En este sentido, el informe sugiere que, en lugar de modificar la Ley de Transparencia, sería más efectivo optimizar la implementación y el cumplimiento de los actuales marcos normativos de fiscalización.

Cabe precisar que el mencionado Informe N.° 006-2023-JUS-TTAIP de la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública también fue remitido a esta Comisión por la Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del **Oficio N.° 443-2023-JUS/SG**, de fecha 08 de febrero de 2023.

De igual manera, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el **Oficio N.° 762-2023-JUS/SG**, de fecha 09 de marzo de 2023, remite el Informe N.° 009-2023-JUS/DGTAIPD, de fecha 16 de febrero de 2023, emitido por el Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que examina el proyecto de ley 3841/2022-CR, que propone modificar la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de fortalecer la labor de fiscalización de los gobiernos locales y regionales.

Sobre el particular, el Ministerio de Justicia señala que la Ley de Transparencia no regula la labor de fiscalización de autoridades, y que dicha modificación debería realizarse en las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y municipales. En el análisis concluye que el proyecto presenta un enfoque normativo inadecuado al intentar modificar la Ley de Transparencia para regular la responsabilidad de los funcionarios electos.

Asimismo, sugiere que las sanciones por incumplimiento de la transparencia deben establecerse en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, ya que estas leyes contemplan el régimen de acceso a la información para autoridades en su labor fiscalizadora. Finalmente, el informe desaconseja asignar la responsabilidad de atender solicitudes de información a gobernadores y alcaldes, argumentando que la designación del Funcionario Responsable del Acceso a la Información es esencial para la eficiencia y celeridad en el proceso.

- **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales**

El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), mediante el Oficio N.° 341-2023-ANGR/P, de fecha 19 de abril de 2023, remite la opinión técnico legal sobre el proyecto de ley 3841/2022-CR, cuyo propósito es modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las Leyes Orgánicas de Municipalidades y de Gobiernos Regionales, para reforzar la labor fiscalizadora de las autoridades locales y regionales, además de establecer sanciones de suspensión para las autoridades electas, como alcaldes y gobernadores regionales, que no cumplan con la entrega de información solicitada.

Al respecto, la ANGR manifiesta su disconformidad con la propuesta, argumentando que dicha disposición resulta redundante, dado que la omisión en la entrega de información ya se encuentra tipificada y sancionada penalmente en el artículo 377 del Código Penal. Señala que la medida implicaría un doble castigo por la misma infracción, lo cual sería innecesario y contradictorio, toda vez que la legislación vigente ya regula la responsabilidad de los funcionarios en relación con la transparencia y el acceso a la información pública. Además, considera inadecuado que el proyecto de ley proponga que, en ausencia de un funcionario específicamente designado para responder a las solicitudes de información, las responsabilidades administrativas y penales recaigan en las máximas autoridades de los gobiernos regionales y municipales.

En conclusión, la ANGR recomienda no aprobar el proyecto de ley 3841/2022-CR en su forma actual, proponiendo que se evite la duplicidad de sanciones y se respete el marco legal existente.

Proyecto de Ley 04046/2022-CR[4]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 4046/2022-CR a las siguientes entidades:

[4] Expediente virtual del proyecto de ley 0046/2022-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4046

Cuadro 9
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 4046/2022-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1758-2022-2023-CCR/CR	ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO Ministra de Salud	26/01/2023
2	1759-2022-2023-CCR/CR	ADRIANA URRUTIA POZZI – ESCOT Presidenta de Transparencia Perú	26/01/2023
3	1760-2022-2023-CCR/CR	ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS Defensora del Pueblo (e)	26/01/2023
4	1761-2022-2023-CCR/CR	JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	26/01/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 4046/2022-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Ministerio de Justicia**

La Secretaria General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 626-2023-JUS/SG, de fecha 22 de febrero de 2023, remite el Informe N.° 007-2023-JUS/DGTAIPD, de fecha 10 de febrero de 2023, emitido por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales sobre el proyecto de ley 4046/2022-CR, que busca fortalecer la transparencia en el sector salud mediante la incorporación de obligaciones de transparencia activa para los establecimientos de salud, tanto públicos como privados.

El MINJUS considera positivo el objetivo de mejorar el acceso a la información en salud, no obstante, destaca observaciones en torno a la sistematicidad de la propuesta dentro del marco normativo vigente y recomienda ajustes para optimizar su implementación.

En el informe se subraya que la propuesta incluye un catálogo de información que los centros de salud deben publicar en tiempo real, como disponibilidad de citas, camas, equipos médicos y medicamentos. Sin embargo, el Ministerio observa que la ubicación del artículo propuesto dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no es la más adecuada,

por cuanto esta ley no regula específicamente la transparencia focalizada, sino la transparencia general. Propone que, en lugar de modificar la Ley de Transparencia, se incluyan estas obligaciones en la Ley General de Salud o mediante una ley especial, permitiendo así una mejor coherencia legislativa y efectividad en la aplicación.

Finalmente, recomienda que la información de salud se publique en los portales institucionales de cada establecimiento o a través de un sistema centralizado gestionado por la Autoridad de Salud, en lugar del Portal de Transparencia Estándar, dado que este último está orientado a la rendición de cuentas general del Estado y no a temas sectoriales específicos. En conclusión, el Ministerio considera viable el proyecto de ley, pero sujeto a las observaciones mencionadas, las cuales contribuirían a una implementación más eficiente y especializada en el sector salud.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0429-2023-DP/PAD, de fecha 18 de agosto de 2023, emitió opinión sobre el proyecto de ley 4046/2022-CR, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia en el sector salud mediante la incorporación de disposiciones adicionales en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Defensoría respalda la iniciativa destinada a mejorar el acceso a la información en salud para facilitar una atención oportuna y una mejor toma de decisiones por parte de los ciudadanos. No obstante, propone ajustes para optimizar el proyecto en términos de clasificación y alcance de la información pública en salud.

Al respecto, la Defensoría sugiere que la información de salud debe clasificarse en tres categorías: (i) información sensible de la persona, que debe mantenerse restringida; (ii) información que habilita a la ciudadanía a ejercer su derecho a la salud, centrada en disponibilidad y calidad de los servicios; y (iii) datos para evaluar el cumplimiento del derecho a la salud por parte del Estado, incluyendo presupuesto y eficiencia en la implementación de políticas de salud. Además, enfatiza que la información debe centralizarse a través del Ministerio de Salud y ser accesible en tiempo real, adaptada en idioma y culturalmente relevante para diversos grupos de población.

Asimismo, la Defensoría recomienda que se facilite el acceso a información esencial en los establecimientos de salud, como disponibilidad de servicios y medicamentos, horario y personal de atención, equipos médicos y sistema de citas. Asimismo, sugiere tomar como referencia el modelo de transparencia implementado en México, que incluye un sistema de información pública que permite a la ciudadanía evaluar el cumplimiento de los servicios de

salud. Finalmente, insta a que estas recomendaciones sean consideradas en el debate legislativo para mejorar la efectividad de la propuesta normativa.

➢ **Ministerio de Salud**

El Secretario General del Ministerio de Salud (MINSA), mediante el Oficio N.° D004098-2023-SG-MINSA, de fecha 21 de setiembre de 2023, remite el Informe N.° D000872-2023-OGAJ/MINSA, de fecha 10 de agosto de 2023, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y otros órganos técnicos sobre el proyecto de ley 4046/2022-CR que busca fortalecer la transparencia en el sector salud. Este proyecto propone la incorporación del artículo 10-A a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, imponiendo a los establecimientos de salud, públicos y privados, la obligación de informar en tiempo real sobre aspectos como disponibilidad de citas médicas, camas hospitalarias, equipamiento médico y medicamentos. El Ministerio considera positiva la iniciativa, pero plantea observaciones técnicas y legales sobre su aplicabilidad y viabilidad en el contexto actual.

El análisis identifica que el marco de la Ley de Transparencia está dirigido principalmente a entidades públicas, y su ampliación hacia entidades privadas requiere modificaciones adicionales. Asimismo, observa que varios aspectos ya están regulados en la Ley N° 29414, que establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud, y en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Los órganos técnicos del MINSA también resaltan limitaciones tecnológicas y financieras en los establecimientos de salud, lo que dificultaría la implementación en tiempo real de las obligaciones propuestas en áreas con infraestructura limitada.

En conclusión, el Ministerio de Salud recomienda ajustar el proyecto de ley para alinearlo con el marco normativo vigente y sugiere que la información de salud se publique en portales accesibles según las capacidades tecnológicas disponibles. Asimismo, el Ministerio enfatiza la necesidad de que cualquier regulación adicional para los establecimientos privados de salud sea coherente con las leyes actuales, para evitar duplicidades y garantizar una implementación eficiente y realista de las obligaciones de transparencia.

Proyecto de Ley 4522/2022-CR[5]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 4522/2022-CR a las siguientes entidades:

[5] Expediente virtual del proyecto de ley 4522/2022-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4522

Cuadro 10
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 4522/2022-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	2382-2022-2023-CCR/CR	JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	24/03/2023
2	2383-2022-2023-CCR/CR	ELIANA REVOLLAR AÑAÑOS Defensora del Pueblo (e)	24/03/2023
3	2384-2022-2023-CCR/CR	DENNYS CUBA RIVERA Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú-AMP	24/03/2023
4	2385-2022-2023-CCR/CR	ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-ANGR	24/03/2023
5	2386-2022-2023-CCR/CR	CHRISTIAN GUZMÁN NAPURÍ Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Económico	24/03/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha esta Comisión no ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 4522/2022-CR.

Proyecto de Ley 5429/2022-CR[6]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 5429/2022-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 11
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 5429/2022-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	3130-2022-2023-CCR/CR	NANCY TOLENTINO GAMARRA Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	17/07/2023

[6] Expediente virtual del proyecto de ley 5429/2022-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5429

2	3131-2022-2023-CCR/CR	JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES Ministro de Desarrollo e Inclusión Social	17/07/2023
3	3132-2022-2023-CCR/CR	DANIEL YSAU MAURATE ROMERO Ministro de Justicia y Derechos Humanos	17/07/2023
4	3133-2022-2023-CCR/CR	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA Ministra de Cultura	17/07/2023
5	3134-2022-2023-CCR/CR	JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	17/07/2023
6	3135-2022-2023-CCR/CR	DAVID SULMONT HAAK Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP	17/07/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 5429/2022-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social**

El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante el Oficio N.° D000563-2023-MIDIS-DM, de fecha 27 de julio de 2023, remite el Informe N.° D000429-2023-MIDIS-OGAJ, de fecha 21 de julio de 2023 que adjunta el Informe Trabajo N.° D000035-2023-MIDIS-OGAJ-TCR, de fecha 21 de julio de 2023, sobre el proyecto de ley 5429/2022-CR, que propone garantizar el acceso a la información pública en lenguas indígenas para pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Al respecto, el MIDIS señala que las disposiciones del proyecto no se encuentran dentro de su ámbito de competencia, ya que este ministerio se enfoca en políticas de desarrollo e inclusión social, mientras que los aspectos de pluralidad cultural e inclusión lingüística corresponden al Ministerio de Cultura.

El informe detalla que el MIDIS, de acuerdo con su normativa interna y leyes vigentes, orienta sus funciones a la inclusión social y a la gestión de programas y políticas de desarrollo social para poblaciones en situación de vulnerabilidad, sin competencias en la promoción y preservación de la pluralidad lingüística. Por lo tanto, la implementación de acceso a la información en lenguas indígenas es responsabilidad del Ministerio de Cultura, que ejerce la rectoría en materia de interculturalidad y pluralidad étnica.

En conclusión, el MIDIS recomienda derivar el proyecto al Ministerio de Cultura para que emita su opinión en el marco de sus competencias.

➢ **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables**

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Oficio N.° D001663-2023-MIMP-SG, de fecha 25 de agosto de 2023, remite el Informe N.° D000765-2023-MIMP-OGAJ, de fecha 23 de agosto de 2023, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, con relación al proyecto de ley 5429/2022-CR, que busca garantizar el acceso a la información pública en lenguas indígenas para las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas.

Al respecto, el MIMP concluye que este tema no recae dentro de sus atribuciones. En el informe destaca que el contenido del proyecto se relaciona con la transparencia de actos del Estado y la sistematización legislativa, ámbitos que competen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura, debido a sus responsabilidades en la sistematización de información jurídica y en la promoción de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el MIMP recomienda que se consulte a estos ministerios para obtener una opinión técnica en el marco de sus competencias específicas.

➢ **Ministerio de Cultura**

El Secretario General del Ministerio de Cultura, mediante el Oficio N.° 000826-2023-SG/MC, de fecha 20 de setiembre de 2023, remite el Informe N.° 001237-2023-OGAJ/MC, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 5429/2022-CR, que busca garantizar el acceso a la información pública en lenguas indígenas para comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. El proyecto propone modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, con el fin de atender las particularidades culturales y lingüísticas de estas poblaciones.

Al respecto, la Dirección de Políticas Indígenas considera el proyecto como pertinente, aunque sugiere modificaciones en la redacción para un mejor ajuste normativo. Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Cultura destaca la importancia de aplicar un enfoque intercultural en la gestión pública, conforme a la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, que busca la adaptación de las instituciones del Estado a las necesidades culturales de los diversos grupos étnicos. Asimismo, recomienda uniformizar el uso de la denominación "pueblos indígenas u originarios" y evitar la referencia separada a

comunidades campesinas y nativas, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa, que establecen criterios de identificación cultural.

Finalmente, el Ministerio concluye que la propuesta normativa es viable, sujeta a las modificaciones recomendadas para el artículo 2 del proyecto. Estas sugerencias incluyen la adaptación del principio de publicidad en la Ley de Transparencia y la inclusión progresiva de publicaciones en lenguas indígenas en la Ley de Producción y Sistematización Legislativa, con el objetivo de respetar y fortalecer la diversidad cultural en el acceso a la información pública.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 049-2024-DP/PAD, de fecha 19 de enero de 2024, remite el Informe Jurídico Defensorial N.° 009-2023-DP/AAC, de fecha 23 de noviembre de 2023, emitido por la Adjuntía para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo sobre el proyecto de ley 5429/2022-CR, busca garantizar el acceso a la información pública en lenguas indígenas u originarias. Este proyecto de ley propone modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Marco para la Producción y Sistematización Jurídica, con el objetivo de promover un enfoque intercultural que permita la publicación progresiva de normativas en lenguas indígenas, respondiendo así a la pluralidad cultural del país y a las necesidades específicas de los pueblos originarios.

Al respecto, el informe resalta la importancia de adoptar un enfoque intercultural e integrador para superar las limitaciones de la Ley de Transparencia, que actualmente presenta una regulación uniforme y no contempla mecanismos de transparencia adaptados a la realidad social, económica y cultural de diversas regiones. También destaca la necesidad de implementar estrategias para cerrar la brecha digital en zonas alejadas, donde residen muchas comunidades indígenas, y sugiere que el Estado realice visitas y campañas de difusión en lenguas originarias para fortalecer el vínculo entre el Estado y estas comunidades, promoviendo un acceso efectivo a la información pública.

En conclusión, la Defensoría del Pueblo considera viable el proyecto de ley con observaciones, señalando que su implementación beneficiaría a los pueblos indígenas en el ejercicio del derecho a saber, fortaleciendo así la transparencia y el acceso a la información pública. También recomienda extender el enfoque a otros grupos vulnerables, como mujeres, personas con discapacidad y poblaciones en situación de pobreza, para asegurar un acceso inclusivo y efectivo a la información en el marco de un Estado pluricultural y democrático.

Proyecto de Ley 5602/2022-CR[7]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 5602/2022-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 12
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 5602/2022-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	139-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	26/09/2023
2	140-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO LUNA CERVANTES Director General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública	26/09/2023
3	141-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	26/09/2023
4	142-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	26/09/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 5602/2022-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0077-2024-DP/PAD, de fecha 02 de febrero de 2024, remite el Informe N.° 004-2024-DP/AAC, de fecha 24 de enero de 2023, sobre el proyecto de ley 5602/2022-CR, que busca modificar el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer la obligación de denunciar penalmente a funcionarios o servidores públicos que incumplan con sus obligaciones de transparencia. La propuesta sugiere que dicha denuncia sea realizada por la segunda instancia administrativa o la autoridad judicial en los casos de cosa decidida o cosa

[7] Expediente virtual del proyecto de ley 5602/2022-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5602

juzgada, implicando sanciones administrativas y penales para aquellos que no denuncien el incumplimiento.

Al respecto, la Defensoría observa que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano encargado de resolver apelaciones en transparencia, carece de facultades para asegurar la ejecución de sus resoluciones, ya que actualmente solo actúa como órgano resolutivo sin mecanismos para supervisar el cumplimiento. Por lo tanto, la Defensoría recomienda que el proyecto se enfoque en fortalecer las atribuciones del Tribunal de Transparencia, dotándolo de facultades sancionadoras y de seguimiento para garantizar la efectividad de sus resoluciones en lugar de trasladar la obligación de denuncia a instancias judiciales o administrativas.

En conclusión, la Defensoría considera que la propuesta legislativa debería redirigirse hacia el fortalecimiento del Tribunal de Transparencia, permitiéndole cumplir efectivamente su rol en la defensa del derecho de acceso a la información pública. Además, señala la falta de justificación en la exposición de motivos sobre la necesidad de penalizar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que sugiere un análisis más profundo de los mecanismos propuestos para asegurar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Proyecto de Ley 5697/2023-CR[8]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 5697/2022-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 13
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 5697/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	185-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	29/09/2023
2	186-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	29/09/2023
	187-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR	29/09/2023

[8] Expediente virtual del proyecto de ley 5697/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5697

3		Defensor del Pueblo	
4	188-2023-2024-CCR/CR	DELIA MUÑOZ MUÑOZ Especialista en Derecho Constitucional Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.	29/09/2023
5	189-2023-2024-CCR/CR	ENRIQUE GHERSI SILVA Especialista en Derecho Constitucional Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.	29/09/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 5697/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Dr. Enrique Ghersi Silva**

Mediante la Carta N.° S/N del Dr. Enrique Ghersi Silva, Especialista en Derecho Constitucional, Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 04 de octubre de 2023, remite su opinión sobre el proyecto de ley 5697/2023-CR, que propone principalmente que todos los funcionarios públicos que están obligados a presentar una declaración jurada de intereses, tengan que publicar las tesis o trabajos de investigación con los que optó a los grados de maestría o doctorado dentro de un plazo de 150 días, que hayan sido aprobados después de 1990, bajo apercibimiento de cesar automáticamente en el ejercicio de sus cargos.

Al respecto, el especialista en Derecho Constitucional señala que de acuerdo a la normativa vigente, a diferencia de lo que indica el proyecto de ley, actualmente solo es obligatorio publicar un resumen o abstract, con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual.

En cuanto a la obligación de registrar las tesis o trabajos de investigación usados para obtener grados y títulos académicos, señala que no existe certeza de la fecha a partir de la cual rige. Por un lado, la Ley 27705, Ley que crea el Registro de Trabajos para optar Grados Académicos y Títulos Universitarios, dispone que todas que se deben registrar todas las investigaciones aprobadas de a partir de 1990; mientras que el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales-RENATI, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N.° 033-2016-SUNEDU, que

establece que la obligación de registro es para los trabajos aprobados a partir del 10 de julio de 2014.

En consecuencia, teniendo en consideración que no existe ninguna sentencia que declare ilegal o inconstitucional el Reglamento del RENATI, señala que no debe obligarse a registrar tesis o trabajos de fecha anterior al 10 de julio de 2014.

Finalmente señala que el proyecto de ley es inconstitucional y arbitrario "en la medida en que propone destituir de pleno derecho a los altos funcionarios públicos que no cumplan con publicar el texto íntegro de su tesis dentro de plazo determinado",

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0678-2023-DP/PAD, fecha 14 de noviembre de 2023, remite el Informe Jurídico Defensorial N.° 0004-2023-DP/ALCCTEE de fecha 10 de noviembre de 2023, emitido por la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, sobre el proyecto de ley 5697/2023-CR, que busca fortalecer la transparencia y los mecanismos de control social para asegurar la idoneidad académica de altos funcionarios y otros servidores públicos. La referida propuesta legislativa propone modificar artículos de la Ley de Transparencia para que las hojas de vida y los trabajos de investigación que sustentaron los grados académicos de los funcionarios sean accesibles en los portales de transparencia de las entidades públicas y del sistema de justicia, además de prohibir el nombramiento de personas cuyos trabajos no estén registrados en RENATI.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera viable la publicación de las hojas de vida, resaltando su utilidad en el control ciudadano y la garantía de la idoneidad de los funcionarios públicos, pero recomienda una revisión integral de la normativa sobre transparencia para especificar mejor el tipo de información que debe publicarse, los plazos y el tipo de funcionarios a quienes aplica. Además, respecto a la publicación de las tesis y trabajos de investigación, señala que la plataforma RENATI ya garantiza dicho acceso, y se sugiere evaluar la posibilidad de incluir en ella trabajos anteriores a su implementación, para lo cual sería importante contar con la opinión técnica de la SUNEDU.

Finalmente, en cuanto a la prohibición de nombramiento de funcionarios cuyos trabajos no estén en RENATI, recomienda reconsiderar esta propuesta. Precisa que para aplicar tal restricción sería necesario que la normativa actual establezca una obligación de registro retroactivo de trabajos académicos, permitiendo su inclusión en RENATI.

En conclusión, la Defensoría aconseja una revisión detallada del proyecto para asegurar su viabilidad y efectividad en el fortalecimiento de la transparencia pública.

- **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales**

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), mediante **Oficio N.° 00393-2024-ANGR/P, de fecha 25 de abril de 2024**, emitió opinión sobre el proyecto de ley 5697/2023-CR, el cual busca fortalecer la transparencia y los mecanismos de control social para garantizar la idoneidad académica de altos funcionarios y otros servidores públicos. La ANGR valora la intención de asegurar la probidad e idoneidad de los funcionarios del Estado, promoviendo la transparencia sobre su formación y experiencia profesional. Sin embargo, el informe expresa varias observaciones al proyecto de ley.

Sobre el particular, la ANGR destaca que la presentación de "Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas" ya está regulada bajo la Ley N° 27482 y la Constitución en su artículo 40, estableciendo que los ingresos de altos funcionarios deben publicarse en el diario oficial "El Peruano". Además, manifiesta que la propuesta puede contravenir la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, exponiendo a los funcionarios a posibles usos indebidos de su información. En cuanto al acceso al texto de tesis y trabajos de investigación, la ANGR considera innecesaria esta disposición, por cuanto estos documentos se encuentran accesibles en RENATI y en los portales de las universidades.

Finalmente, la ANGR señala que la limitación propuesta sobre la contratación de profesionales por la ausencia de tesis de maestría o doctorado afectaría el derecho fundamental al trabajo, reconocido en el artículo 22 de la Constitución. En conclusión, la ANGR sugiere reconsiderar el proyecto en vista de las observaciones mencionadas.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), mediante **Oficio N.° 00462-2024-ANGR/P, de fecha 06 de mayo de 2024**, emitió opinión sobre el proyecto de ley 5697/2023-CR.

Al respecto, la ANGR señala que la presentación de "Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas" está regulada por el artículo 4 de la Ley N° 27482 y la Constitución en su artículo 40, indicando la obligatoriedad de publicar los ingresos de altos funcionarios en el diario oficial "El Peruano". Asimismo, advierte que la propuesta puede entrar en conflicto con la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, exponiendo a los funcionarios a potenciales vulneraciones de privacidad. Además, sobre el acceso a las tesis o trabajos de

investigación de los funcionarios, la ANGR considera esta disposición innecesaria, ya que RENATI y los portales universitarios ya cumplen con esta función.

Sumado a ello, la ANGR expresa preocupación ante la restricción que el proyecto plantea sobre la contratación de profesionales en ausencia de tesis de maestría o doctorado, lo que podría afectar el derecho fundamental al trabajo, reconocido en el artículo 22 de la Constitución. En ese sentido, la ANGR sugiere reconsiderar el proyecto en base a estas observaciones y considera innecesario pronunciarse sobre otros aspectos, estimando que los puntos expuestos son suficientes para fundamentar su posición.

Proyecto de Ley 6002/2023-CR[9]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 14
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6002/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	549-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	05/12/2023
2	550-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	05/12/2023
3	551-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	05/12/2023
4	552-2023-2024-CCR/CR	DELIA MUÑOZ MUÑOZ Especialista en Derecho Constitucional Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.	05/12/2023
5	553-2023-2024-CCR/CR	ENRIQUE GHERSI SILVA Especialista en Derecho Constitucional Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.	05/12/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

[9] Expediente virtual del proyecto de ley 6002/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6002

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6002/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D003260-2023-PCM-SG, de fecha 11 de diciembre de 2023, remite el Informe N.° D001758-2023-PCM-OGAJ, de fecha 06 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR, el cual propone facilitar el acceso directo a la información pública mediante el uso de tecnología, permitiendo a los ciudadanos registrar digitalmente documentos de manera gratuita.

Al respecto, la PCM señala que este proyecto no se encuentra dentro de sus competencias, ya que las materias de transparencia y acceso a la información corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que regula los temas de acceso a la información pública ni su administración, para que emita una opinión técnica y jurídica más adecuada sobre la iniciativa.

- **Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN**

El Director del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), mediante el Oficio N.° D000204-2023-CEPLAN-DE, de fecha 19 de diciembre de 2023, remite el Informe N.° D000322-2023-CEPLAN-OAJ, de fecha 19 de diciembre de 2023, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR, el cual busca facilitar la transparencia y el acceso directo a la información pública mediante el uso de tecnología. Para ello, se propone una modificación del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permitiendo a los ciudadanos acceder directamente a la información pública de manera inmediata y sin costo, utilizando herramientas tecnológicas como dispositivos móviles, correos electrónicos y mensajería digital.

Al respecto, el CEPLAN señala que la iniciativa se enmarca dentro de las políticas de modernización de la gestión pública y el gobierno abierto, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana. Asimismo, sugiere articular el proyecto con políticas nacionales y coordinar con instituciones rectoras para fortalecer su implementación.

Finalmente, el informe concluye que el proyecto de Ley es viable, sujeto a comentarios específicos sobre su alineación y articulación con los marcos normativos y estratégicos vigentes.

- **Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación**

El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), mediante el Oficio N.° 622-2023-CONCYTEC-P, de fecha 21 de diciembre de 2023, remite los Informes N.° D000041-2023-CONCYTEC-OGAJ, de fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe N.º D000453-2023-CONCYTEC-DPP, de fecha 20 de diciembre de 2023, emitido por la Dirección de Políticas y Programas de Ctel, sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR, que tiene por objetivo modificar el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para facilitar el acceso directo del ciudadano a la información mediante el uso de tecnología.

Al respecto el CONCYTEC destaca la importancia de garantizar el acceso público, pero también considera las limitaciones y excepciones establecidas en la normativa vigente, como la información clasificada. Además, observa que, aunque la tecnología facilita el acceso a la información, algunas solicitudes podrían requerir medios de entrega específicos (como USB o dispositivos físicos), lo cual podría implicar costos adicionales, no obstante, en la propuesta analizada se precisa que el uso de dichas tecnologías no debe implicar gasto al ciudadano. En consecuencia, recomienda modificar el proyecto para que la redacción sea flexible, permitiendo que el acceso directo y la tecnología se ajusten a la disponibilidad y capacidad de los dispositivos del usuario.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0061-2024-DP/PAD, de fecha 29 de enero de 2024, remite el Informe N.° 001-2024-DP/AAC, de fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR, que busca permitir el acceso directo y sin costo a la información pública mediante dispositivos móviles.

Al respecto, la Defensoría señala que se bien lo considera beneficioso, subraya la necesidad de respetar las normas de confidencialidad en el manejo de información clasificada. Concluye que la propuesta legislativa es viable y que coadyuvaría a una mejor garantía del derecho fundamental de acceso a la información; sin embargo indica que requiere de mayor sustento, a fin de poder evaluar su efectiva incorporación en nuestro ordenamiento jurídico.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 2229 -2024-JUS/SG, de fecha 27 de junio de 2024, remite el Oficio N. ° 409-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe Jurídico N° 02-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 23 de enero de 2024, elaborado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre el proyecto de ley 6002/2023-CR, orientado a facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública mediante el uso de tecnología; a través de la modificación del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando herramientas tecnológicas que permitan un acceso inmediato y directo a los documentos, sin costo para el ciudadano.

Al respecto, el MINJUS recomienda ajustar el título y redacción para mayor precisión legislativa y evitar una desnaturalización del acceso directo respecto del procedimiento formal regulado en el artículo 11 de la misma ley. Además, enfatiza la necesidad de establecer parámetros claros para este acceso inmediato, garantizando la integridad de la información y limitando el acceso a contenidos que no requieran un análisis previo.

En conclusión, el informe considera viable el proyecto de ley, siempre que se implementen ajustes para respetar la naturaleza del acceso directo y sus limitaciones. Asimismo, sugiere una revisión del texto propuesto para asegurar una correcta aplicación de los principios de transparencia y celeridad, reforzando su alineación con los avances tecnológicos en el marco del derecho de acceso a la información pública.

Proyecto de Ley 6011/2023-CR[10]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6011/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 15
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6011/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	554-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	04/12/2023
	555-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	04/12/2023

[10] Expediente virtual del proyecto de ley 6002/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6011

2			
3	556-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	04/12/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6011/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0061-2024-DP/PAD, de fecha 29 de enero de 2024, remite el Informe N.° 001-2024-DP/AAC, de fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de ley 6011/2023-CR, que busca modificar el artículo 7 de la Ley 27806, con el objeto de establecer de forma expresa que las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser presentadas por escrito o de forma verbal. Asimismo, busca establecer que si las solicitudes son presentadas verbalmente, la entidad tiene la obligación de registrarla inmediatamente y entregar el cargo al solicitante. Dicho procedimiento estaría a cargo de las mesas de partes físicas.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera que regular solo dos formas de presentación de solicitudes de acceso a la información pública podría ser perjudicial, en tanto las entidades obligadas se orientarían a aceptar únicamente pedidos escritos o verbales, dejando de lado otros medios que se vienen utilizando actualmente como el virtual o el acceso directo.

En relación con el avance de la digitalización en el Estado y la necesidad urgente de acceder a información de interés público, la Defensoría sugiere emplear términos amplios que incluyan todos los mecanismos posibles para acceder a información pública. Asimismo, sobre la regulación del procedimiento para la tramitación de solicitudes presentadas verbalmente, la Defensoría del Pueblo lo considera positivo, ya que permitirá llevar un registro adecuado de estas solicitudes y brindarles el trámite correspondiente, garantizando así el derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Además, recuerda la importancia de capacitar al personal encargado de la recepción y registro de las solicitudes; y precisa que requiere un mayor sustento, para poder evaluar su incorporación efectiva en el ordenamiento jurídico nacional.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 1822 -2024-JUS/SG, de fecha 03 de junio de 2024, remite el Oficio N.º 319-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe Jurídico N° 02-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 23 de enero de 2024, elaborado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre el proyecto de ley 6011/2023-CR, sobre el proyecto de ley N° 6011/2023-CR, que busca modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para permitir la presentación de solicitudes de acceso a la información de forma verbal. Este proyecto, al facilitar el acceso a la información pública, es valorado positivamente al alinearse con estándares internacionales y legislaciones comparadas.

Al respecto, la Defensoría recomienda ajustar el título y redacción de la propuesta para cumplir con la técnica legislativa y modificar el artículo 11 de la ley actual en lugar del artículo 7, dado que esta disposición trata el procedimiento de solicitud, haciendo la normativa más sistemática y clara. Adicionalmente, sugiere establecer que las entidades registren la solicitud verbal y emitan una constancia al solicitante para un adecuado seguimiento. Concluye que el proyecto es viable con observaciones, y recomienda considerar las modificaciones sugeridas.

Proyecto de Ley 6013/2023-CR[11]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6013/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 16
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6013/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	557-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	05/12/2023
2	558-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	05/12/2023
3	559-2023-2024-CCR/CR	NELSON EDUARDO SHACK YALTA Contralor General de la República	05/12/2023

[11] Expediente virtual del proyecto de ley 6013/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6013

4	560-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	05/12/2023
5	561-2023-2024-CCR/CR	BENJAMÍN MARTICORENA CASTILLO Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-CONCYTEC	05/12/2023
6	562-2023-2024-CCR/CR	LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Consejo de Ministros	05/12/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6013/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación**

El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), mediante el Oficio N.° 614-2023-CONCYTEC-P, de fecha 14 de diciembre de 2023, remite el Informe N.° D000040-2023-CONCYTEC-OGAJ, de fecha 14 de diciembre de 2023, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 6013/2023-CR, que propone la modificación del artículo 13 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer la obligatoriedad de las entidades públicas de remitir la información solicitada a través del medio virtual cuando el solicitante así lo exija.

Al respecto el CONCYTEC señala que el mencionado proyecto de ley expone que la Ley 27806 no contempla formalidades específicas para la entrega de información de forma virtual. Por ello, se sugiere aplicar, de manera supletoria, el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual regula la notificación electrónica y establece un procedimiento en caso de no recibir confirmación automática de recepción. Asimismo, se considera prudente solicitar la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar la correcta interpretación y aplicación de los preceptos de transparencia y acceso a la información pública.

Finalmente, concluye que el proyecto de ley puede contribuir al acceso a la información pública, siempre que se implementen procedimientos claros que garanticen la validez de las notificaciones electrónicas conforme a la normativa vigente.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0061-2024-DP/PAD, de fecha 29 de enero de 2024, remite el Informe N.° 001-2024-DP/AAC, de fecha

16 de enero de 2023, emitido por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de ley 6013/2023-CR, que busca modificar el artículo 13 de la Ley 27806, para plantear que las entidades públicas deban entregar información en formato virtual si el solicitante así lo indica, considerándose denegada la solicitud en caso contrario. No obstante, el artículo 10 de la Ley 27806 ya establece el deber de las entidades de facilitar la información en cualquier formato bajo su posesión.

Al respecto, la Defensoría señala que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Transparencia han ratificado que la negativa de una entidad a entregar información en el formato solicitado vulnera el derecho de acceso a la información pública, considerando que ello afecta el derecho del solicitante a recibir la información en los términos específicos requeridos. Asimismo, resaltó que, en su Balance de Gestión, una de las principales causas de apelación de los administrados es la entrega de información en un formato distinto al solicitado.

En ese sentido, concluye que la propuesta de modificación no resulta necesaria, ya que la normativa vigente, así como la jurisprudencia y criterios de los órganos garantizados, reconocen que el derecho de acceso a la información pública implica recibir la información en el formato requerido por el administrado; y precisa que la ley y su interpretación actual permiten la exigibilidad de este derecho sin necesidad de cambios de adición.

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D000213-2024-PCM-SG, de fecha 02 de febrero de 2024, remite el Informe N.° D000153-2024-PCM-OGAJ de fecha 31 de enero de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 6013/2023-CR, cuyo propósito es garantizar la entrega virtual de información pública cuando el solicitante lo exprese de manera explícita. Esta propuesta busca acelerar los procesos de notificación y superar barreras geográficas y económicas al permitir que los ciudadanos reciban información directamente en sus domicilios electrónicos.

Al respecto, la PCM señala que esta iniciativa está alineada con la estrategia que promueve denominada "cero papel", para reducir el uso de papel y los costos relacionados con la gestión documental; y contribuye a una administración pública más eficiente y digitalizada, en consonancia con las políticas nacionales de transformación digital.

Finalmente, el informe recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emita una opinión adicional sobre el proyecto, dado que incluye competencias de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N. ° 442-2024-JUS/SG, de fecha 09 de febrero de 2024, remite el Oficio N° 051-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe Jurídico N° 04- 2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 23 de enero de 2024, elaborado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Viceministerio de Justicia, sobre el proyecto de ley 6013/2023-CR, que busca garantizar la entrega virtual de la información pública cuando así se solicite, a través de la modificación del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al respecto, el MINJUS señala que la normativa vigente ya contempla la obligatoriedad de cumplir con la modalidad de entrega solicitada, sin que la entidad imponga un medio distinto, siempre que el solicitante asuma los costos correspondientes. Asimismo, precisa que tanto la Autoridad Nacional de Transparencia como el Tribunal de Transparencia ya reconocen que cambiar el medio solicitado constituye una denegación implícita, y el solicitante puede recurrir a apelación. Por ello, se considera que el proyecto de ley no introduce un cambio necesario y, en algunos aspectos, podría limitar la aplicación actual de la ley.

Finalmente, el MINJUS concluye que el proyecto no es viable, dado que la regulación propuesta está cubierta en la normativa vigente de manera amplia y garantista.

- **Contraloría General de la República**

El Contralor General de la de la República, mediante el Oficio N.° 000405-2024-CG/DC, de fecha 13 febrero de 2024, remite el Anexo que analiza el proyecto de ley 6013/2023-CR, que tiene como objetivo ajustar los procedimientos y tiempos de respuesta de las entidades públicas para mejorar la disponibilidad de información y la rendición de cuentas, favoreciendo así el derecho de acceso a la información para los ciudadanos.

Al respecto, la Contraloría reconoce que un marco normativo más claro y específico podría optimizar la eficiencia en la gestión de solicitudes de información pública; sin embargo, enfatiza la necesidad de evaluar cuidadosamente los recursos y capacidades operativas de las instituciones involucradas, ya que la implementación de nuevos plazos o procedimientos podría demandar mayores recursos humanos y financieros.

En conclusión, la Contraloría recomienda que, si bien es positiva la intención de mejorar el acceso a la información, se realicen ajustes a la propuesta para asegurar que sea factible y sostenible dentro del marco operativo de las entidades públicas, evitando que se generen cargas administrativas excesivas o dificultades operativas que puedan afectar la calidad del servicio de transparencia.

Proyecto de Ley 06041/2023-CR[12]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6041/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 17
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6041/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	573-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	04/12/2023
2	574-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	04/12/2023

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6041/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0061-2024-DP/PAD, de fecha 29 de enero de 2024, remite el Informe N.° 001-2024-DP/AAC, de fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de ley 6041/2023-CR, que propone modificar al literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, a fin de regular de forma expresa que el ejercicio del derecho de contradicción administrativa, traducido en la apelación en el ámbito del acceso a la información pública, no requiere firma de abogado para su tramitación. De acuerdo al sustento de dicha propuesta, ello facilitaría el ejercicio del derecho a saber.

[12]Expediente virtual del proyecto de ley 6041/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6041

Al respecto, la Defensoría del Pueblo indica que no ha identificado ni conocido problemas relacionado con la exigencia de la firma de un abogado para la presentación de recursos de apelación ante el Tribunal de Transparencia, y que la iniciativa legislativa carece de estudios o hallazgos que fundamenten la necesidad de modificar este requisito. La Defensoría enfatiza la ausencia de casos en los que dicha exigencia haya restringido el derecho de acceso a la información o haya generado alguna problemática bajo la normativa vigente.

Asimismo destaca que la exigencia de firma de abogado/a sí se presenta como problema en el ámbito judicial, para la presentación del proceso constitucional de habeas data. Esto debido a que el Nuevo Código Procesal Constitucional incluyó la obligación de este requisito procesal, a diferencia del artículo 65 del derogado Código Procesal Constitucional, el cual disponía que no fuera obligatorio el patrocinio de un abogado para impulsar el referido proceso judicial.

Finalmente, la Defensoría precisa que de la revisión de la exposición de motivos del proyecto de ley objeto de análisis, si bien está referido a la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión pública y el uso de la tecnología; no realiza un análisis detallado que sustente las modificaciones propuestas de la Ley 27806, de conformidad con lo establecido en la técnica legislativa.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 455 -2024-JUS/SG, de fecha 09 de febrero de 2024, remite el Oficio N. ° 050-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe Jurídico N° 05-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 23 de enero de 2024, elaborado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Viceministerio de Justicia, sobre el proyecto de ley N° 6041/2023-CR, que propone una modificación a la Ley N° 27806 para eliminar la exigencia de la firma de abogado en las apelaciones administrativas, buscando simplificar y facilitar el acceso a la información pública.

Al respecto, el MINJUS resalta su importancia en la promoción de transparencia y accesibilidad; sin embargo, observa que el título del proyecto podría ajustarse mejor a la técnica legislativa, recomendando que se especifique su naturaleza como ley modificatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, sugiere mejoras en la redacción de los artículos, proponiendo, entre otras cosas, que el plazo para presentar

recursos de apelación sea de quince días hábiles en lugar de quince días calendario, para mayor coherencia y previsibilidad en los procedimientos.

Finalmente, el MINJUS recomienda que el plazo máximo para resolver las apelaciones ante el Tribunal de Transparencia se fije en treinta días hábiles desde su recepción, garantizando una mayor seguridad jurídica y cumplimiento de principios administrativos. La conclusión del informe indica que el proyecto es viable, con las observaciones señaladas para mejorar su precisión técnica y eficacia en la promoción del acceso a la información pública.

Proyecto de Ley 6156/2023-CR[13]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 06156/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 18
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 06156/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	580-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	27/08/2024
2	593-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	27/08/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6156/2023-CR conforme el siguiente detalle:

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 3033 -2024-JUS/SG, de fecha 14 de agosto de 2024, que remite el Oficio N° 604-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe Jurídico N° 06-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 23 de enero de 2024, elaborado por la Dirección General de

[13] Expediente virtual del proyecto de ley 6156/2023-CR https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6156

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre el Proyecto de Ley 6156/2023-CR, que propone modificar el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para evitar la exigencia de la firma de abogado en las solicitudes de acceso a la información pública.

Al respecto, el MINJUS destaca que el proyecto facilita el acceso a la información pública en línea con los principios de predictibilidad, informalismo y simplicidad, esenciales en el marco normativo vigente. Sin embargo sugiere ajustes técnicos en el título y objeto de la ley para que reflejen mejor su propósito. Recomienda que el artículo 11 de la Ley de Transparencia sea el que se modifique, por ser el que regula los procedimientos, y que el texto especifique que la asistencia de abogado queda a criterio del solicitante, para evitar confusiones sobre a una posible prohibición general de asistencia letrada.

Finalmente, el MINJUS concluye que, si bien no se detecta un problema público relevante que justifique la norma, la propuesta es viable con observaciones, y recomienda adecuar el texto conforme a las precisiones propuestas para optimizar su aplicación.

Proyecto de Ley 6157/2023-CR[14]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley N° 6157/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 19
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 6157/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	625-2023-2024-CCR/CR	LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Consejo de Ministros	04/01/2024
2	626-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	04/01/2024
3	627-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	04/01/2024
4	628-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	04/01/2024

[14] Expediente virtual del proyecto de ley 6157/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6157

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6157/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D000064-2024-PCM-SG, de fecha 11 de enero de 2024, remite el Informe N.° D000034-2024-PCM-OGAJ, de fecha 10 de enero de 2024, elaborado por Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre el proyecto de ley 6157/2023-CR, que busca modificar el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de garantizar la gratuidad del acceso a la información pública cuando sea solicitada en formato digital.

Al respecto, la PCM señala que remitió el pedido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, considerando que la temática abordada en el proyecto se alinea más directamente con las competencias de dicho ministerio, dado su rol en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública.

En conclusión, la PCM indica que, conforme a su marco competencial, no corresponde que emita opinión sobre el proyecto de ley 6157/2023-CR y recomienda que el Ministerio de Justicia sea quien responda a la solicitud.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 1505 -2024-JUS/SG, de fecha 17 de mayo de 2024, remite el Oficio N.° 0273-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores que deriva el Informe N.° 012-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 15 de abril de 2024, de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre el proyecto de ley 6157/2023-CR, que busca modificar el artículo 17 de la Ley 27806 para establecer la entrega gratuita de información pública cuando se solicita en formato digital.

Al respecto, el MINJUS señala que el proyecto evidencia la preocupación por garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante la gratuidad en la entrega de

información digital. Sin embargo, destaca que tanto la Ley 27806 como su Reglamento y el Decreto Supremo 164-2020-PCM ya regulan la gratuidad para la información entregada por medios digitales, como el correo electrónico, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los criterios establecidos por órganos garantes.

En conclusión, el MINJUS considera que el Proyecto de Ley N° 6157/2023-CR es innecesario, dado que el marco normativo vigente ya asegura la gratuidad en la entrega de información digital. Por tanto, el informe recomienda declarar no viable la propuesta, al tiempo que enfatiza la suficiencia de la normativa actual para garantizar el acceso gratuito a la información pública cuando se solicita en formato digital.

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.° 4165-2024-JUS-SG-24-10-2024, de fecha 23 de octubre de 2024, remite el Oficio N.° 927-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que deriva el Informe N.° 283-2024-JUS/DGDNCR, de fecha 22 de agosto de 2024, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria sobre el proyecto de ley 6157/2023-CR, que busca asegurar la gratuidad de la información pública cuando esta se solicita y entrega en formato digital, a través de la modificación al artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para especificar que el envío de información a un domicilio electrónico es gratuito

Al respecto, el MINJUS concluye que la disposición coincide con las normas vigentes y reafirma el derecho de acceso a la información pública bajo los principios de transparencia y gratuidad; sin embargo, precisa que el proyecto no cumple completamente con los estándares de calidad normativa y técnica legislativa exigidos por la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, como el análisis de impacto y la justificación técnica en la exposición de motivos.

Proyecto de Ley 6405/2023-CR[15]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley N° 6405/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 20
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6405/2023-CR

[15] Expediente virtual del proyecto de ley 6405/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6405

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	620-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	04/01/2024
2	621-2023-2024-CCR/CR	LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Consejo de Ministros	04/01/2024
3	622-2023-2024-CCR/CR	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA Ministra de Cultura	04/01/2024
4	623-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	04/01/2024
5	624-2023-2024-CCR/CR	ALVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	04/01/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6405/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0066-2024-DP/PAD, de fecha 30 de enero de 2024, remite el Informe N.° 009-2023-DP/AAC, de fecha 23 de noviembre de 2023, elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de ley 6405/2023-CR, que por busca garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas u originarios, con contenido similar a la propuesta legislativa 5429/2022-CR, que ya cuenta con opinión de esta institución.

Al respecto, la Defensoría considera que esta propuesta responde a la necesidad de cumplir con el estado de cosas inconstitucional declarado por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00889-2017-PA/TC, en el año 2017, que resaltó la falta de comunicación en lenguas originarias en áreas donde estas predominan. De igual manera, destaca la importancia del derecho al uso de la lengua como un derecho humano fundamental y la necesidad de proteger a las minorías lingüísticas. Asimismo, señala que la Ley de Transparencia actual no contempla adecuadamente la interculturalidad ni incentiva mecanismos adaptados a las realidades socioeconómicas y culturales de las regiones.

La Defensoría concluye que el proyecto es viable con observaciones, por cuanto reconoce la pluriculturalidad del Estado peruano; y permitirá garantizar el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos de grupos vulnerables, en particular a las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, sugiere que se amplíe el enfoque a otros grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad y en situación de pobreza.

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D000255-2024-PCM-SG, de fecha 12 de febrero de 2024, remite el Informe N.° D000175-2024-PCM-OGAJ, de fecha 06 de febrero de 2024, sobre el proyecto de ley el 6405/2023-CR, que propone modificar el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para asegurar que los pueblos indígenas y originarios accedan a la información pública en un contexto que respete y considere su diversidad cultural.

Al respecto, la PCM señala que el proyecto de ley no se relaciones con sus competencias específicas, que incluyen la coordinación de políticas nacionales y sectoriales y la promoción de la transparencia en la gestión pública, entre otras áreas.

En ese sentido, recomienda que, por competencia, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitan sus opiniones técnicas respecto al proyecto.

- **Ministerio de Cultura**

La Ministra de Cultura, mediante el Oficio N.° 000511-2024-DM/MC, de fecha 23 de mayo de 2024, que remite el Informe N.° 000652-2024-OGAJ-SG/MC, de fecha 26 de abril de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 6405/2023-CR, que busca modificar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas, tomando en cuenta su diversidad cultural, lingüística y geográfica.

El Ministerio de Cultura, a través de su Oficina General de Asesoría Jurídica, evaluó la propuesta normativa y recibió aportes técnicos del Viceministerio de Interculturalidad, los cuales resaltan la importancia de ampliar el alcance de la ley para incluir también al pueblo afroperuano en el reconocimiento de la diversidad cultural.

El informe destaca la pertinencia de adecuar la normativa de transparencia a un contexto multicultural, conforme a los principios de interculturalidad establecidos en la Política Nacional de Cultura al 2030. El análisis identifica que en el Perú coexisten 55 pueblos indígenas con 48 lenguas originarias y que, adicionalmente, el pueblo afroperuano constituye un grupo significativo en el país. La recomendación técnica del Ministerio es que la redacción del proyecto se modifique para garantizar el acceso a la información pública considerando tanto a los pueblos indígenas como a la población afroperuana, reflejando así una diversidad cultural más inclusiva.

En conclusión, el Ministerio de Cultura considera que el proyecto es viable con las recomendaciones propuestas. Se sugiere modificar los artículos para incorporar una mención explícita de la diversidad cultural y lingüística del país, incluyendo la situación del pueblo afroperuano. Asimismo, se recomienda que la exposición de motivos del proyecto se amplíe para reconocer el valor de la diversidad cultural en el desarrollo humano del Perú, asegurando que el acceso a la información se adapte de manera más adecuada a las necesidades de los distintos grupos culturales en el país.

Proyecto de Ley 06483/2023-CR[16]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6483/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 21
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6483/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	295-2024-2025-CCR/CR	DELIA MILAGROS ESPINOZA VALENZUELA Fiscal de la Nación	22/10/2024
2	296-2024-2025-CCR/CR	JAVIER ARÉVALO VELA Presidente del Poder Judicial	22/10/2024
3	297-2024-2025-CCR/CR	GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA Presidente del Consejo de Ministros	22/10/2024
4	298-2024-2025-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	22/10/2024

[16] Expediente virtual del proyecto de ley 6483/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6483

5	299-2024-2025-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	22/10/2024
6	304-2024-2025-CCR/CR	EDUARDO JAVIER LUNA CERVANTES Director General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ANTAIP	22/10/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido una respuesta a la solicitud de opinión formulada respecto del proyecto de ley 6483/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.º D003226-2024-PCM-SC, de fecha 24 de octubre de 2024, remite el Informe N.º D001957-2024-PCM-OGAJ, de fecha 28 de octubre de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley N.º 6483/2023-CR el cual propone que las carpetas fiscales y expedientes judiciales en etapa de juicio oral se consideren información pública, a través de la modificación del artículo 10 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de reforzar la transparencia en la administración de justicia.

Al respecto, la PCM señala no tener competencias para emitir opiniones sobre temas judiciales de esta índole, por no estar alineadas con sus responsabilidades, tales como la coordinación de políticas nacionales. y la modernización de la gestión pública. Asimismo, establece que el ámbito competencial sobre el acceso a la justicia y otros temas afines corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según lo estipulado en la ley.

Proyecto de Ley 06484/2023-CR[17]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6484/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 22
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6484/2023-CR

[17] Expediente virtual del proyecto de ley 6484/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6484

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	300-2024-2025-CCR/CR	GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA Presidente del Consejo de Ministros	22/10/2024
2	301-2024-2025-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	22/10/2024
3	302-2024-2025-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	22/10/2024
4	305-2024-2025-CCR/CR	EDUARDO JAVIER LUNA CERVANTES Director General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ANTAIP	22/10/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión no ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6484/2023-CR.

Proyecto de Ley 06631/2023-CR[18]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 6631/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 23
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 6631/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	616-2023-2024-CCR/CR	LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Consejo de Ministros	04/01/2024
2	617-2023-2024-CCR/CR	ALVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	04/01/2024
3	618-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	04/01/2024

[18] Expediente virtual del proyecto de ley 6631/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6631

4	619-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	04/01/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 6631/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio N.° D000065-2024-PCM-SG, de fecha 11 de enero de 2024, remite el Informe N.° D000031-2024-PCM-OGAJ, de fecha 10 de enero de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 6631/2023-CR que propone una modificación a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer un plazo adicional de siete días hábiles en la entrega de información pública, en casos excepcionales que justifiquen la demora por limitaciones logísticas u operativas de la entidad correspondiente.

Al respecto, la PCM señala que la competencia sobre el proyecto recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dada la naturaleza del proyecto y las competencias definidas en la Ley 29809 para el Ministerio de Justicia, considerando que el contenido del proyecto involucra directamente derechos humanos y regulaciones afines a las funciones del Ministerio de Justicia.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0076-2024-DP/PAD, de fecha 02 de febrero de 2024, remite el Informe Jurídico Defensorial N.° 003-2024-DP/AAC, de fecha 24 de enero de 2023, elaborado por la Adjuntía para los Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de ley 6631/2023-CR, que propone modificar el artículo 11, literal g), de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo un plazo fijo de siete días hábiles como prórroga para la entrega de información pública y exigiendo que dicha prórroga sea autorizada por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).

Al respecto, la Defensoría observa que, aunque el proyecto tiene la intención de regular de manera uniforme el uso de la prórroga, resulta inviable debido a que no siempre es suficiente un plazo adicional fijo para gestionar solicitudes de distinta complejidad y volumen. Además,

someter a autorización del TTAIP cada prórroga añadiría una carga administrativa considerable para el tribunal y extendería innecesariamente el proceso de atención de solicitudes de acceso a la información. Asimismo, el informe señala que los administrados ya tienen mecanismos para reclamar en caso de prórrogas desproporcionadas, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional y resoluciones del propio TTAIP.

En conclusión, la Defensoría del Pueblo recomienda reevaluar la viabilidad de la propuesta legislativa, sugiriendo que no se incorpore en el ordenamiento jurídico en su forma actual y que se consideren aportes que aseguren un balance entre la accesibilidad a la información y la capacidad operativa de las entidades públicas.

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

El Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), mediante el Oficio N.º 1863 -2024-JUS/SG, de fecha 05 de junio de 2024, remite el Oficio N° 333-2024-JUS/GA del Gabinete de Asesores, que traslada el Informe Jurídico N° 011-2024-JUS/DGTAIPD, de fecha 15 de abril de 2024, elaborado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre el proyecto de ley 6631/2023-CR, que plantea modificar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer un plazo máximo de siete días hábiles adicionales para la entrega de información, bajo ciertas condiciones excepcionales, y requiere autorización del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) para dicha prórroga.

Al respecto, el MINJUS señala que si bien la iniciativa refleja una intención de garantizar el derecho de acceso a la información, la normativa vigente ya permite a las entidades públicas determinar un plazo razonable de prórroga, adaptado a la complejidad del caso, lo cual resulta más adecuado y realista para la administración pública. Además, se considera inviable establecer un plazo adicional fijo de siete días hábiles, ya que esto podría comprometer la continuidad del servicio público, exponiendo a los funcionarios a sanciones si no cumplen el nuevo plazo. Asimismo, el TTAIP no cuenta con competencias "autorizatorias", por lo que incluir una función de autorización en este órgano desnaturalizaría su rol de instancia resolutiva.

En conclusión, el informe determina que el proyecto de ley analizado no resulta viable, recomendando que se mantenga el texto actual de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite a las entidades un plazo de prórroga flexible y sujeto a control posterior.

Proyecto de Ley 7077/2023-CR[19]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 7077/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 24
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 7077/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1193-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	09/05/2024
2	1194-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensor del Pueblo	09/05/2024
3	1195-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	09/05/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 7077/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el OFICIO N° D000580-2024-PCM-SG, de fecha 25 de marzo de 2024, remite el INFORME N° D000440-2024-PCM-OGAJ, de fecha 22 de marzo de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 7077/2023-CR, que propone modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando el literal g) al artículo 16 del Texto Único Ordenado de dicha ley, para clasificar como reservada la información de la etapa de investigación preparatoria efectuada por el Ministerio Público, incluyendo la actuación de sus órganos de apoyo.

[19] Expediente virtual del proyecto de ley 7077/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7077

Al respecto, la PCM señala que no le corresponde intervenir en temas relacionados con la clasificación de información en investigaciones judiciales, por cuanto dicha competencia reside en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con la Ley N° 29809.

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.º 298-2024-DP/PAD, de fecha 18 de junio de 2024, remite el Informe Jurídico Defensorial N.º 009-2024-DP/AAC, elaborado por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de ley 7077/2023-CR, que propone clasificar como reservada la información generada en la fase de investigación preparatoria penal, a través de la modificación del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, justificándose en la necesidad de proteger el honor, la intimidad, la seguridad y la vida de los sujetos procesales, así como salvaguardar los objetivos de la investigación.

Al respecto, la Defensoría señala que esta restricción ya se encuentra prevista en el marco legal actual, destacando que el artículo 324 del Código Procesal Penal clasifica la investigación preparatoria como información confidencial, protegida bajo el derecho a la intimidad y la seguridad de las personas involucradas. Asimismo, hace referencia a opiniones consultivas y precedentes del Tribunal Constitucional y la Autoridad Nacional de Transparencia, las cuales respaldan que el acceso a información pública puede restringirse únicamente en los casos establecidos por ley, priorizando el derecho a la información pública cuando se trata de datos de interés público.

Por último, recomienda evaluar modificaciones al Código Procesal Penal para especificar los criterios bajo los cuales se permitirá el acceso a información en investigaciones penales, sin necesidad de reformar la Ley de Transparencia.

Proyecto de Ley 7412/2023-CR[20]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 7412/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 25

[20] Expediente virtual del proyecto de ley 7412/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7412

Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 7412/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO
1	1387-2023-2024-CCR/CR	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA Ministerio de Cultura	29/04/2024
2	1388-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	29/04/2024
3	1389-2023-2024-CCR/CR	JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR Defensoría del Pueblo	29/04/2024
4	1390-2023-2024-CCR/CR	DELIA MUÑOZ MUÑOZ Especialista en Derecho Constitucional	29/04/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 7412/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Defensoría del Pueblo**

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el **Oficio N.° 0241-2024-DP/PAD**, de fecha 15 de mayo de 2024, remite el Informe N.° 008-2024-DP/AMASPPI-PPI, de fecha 14 de mayo de 2024, elaborado por la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, sobre el proyecto de ley 7412/2023-CR, que propone modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar que la información pública solicitada sea entregada en la lengua originaria de la persona, cuando esta acredite que su único idioma es una lengua indígena.

Al respecto, la Defensoría resalta la importancia de este proyecto en la promoción de un acceso inclusivo a la información pública y sugiere incorporar elementos que refuercen el enfoque de igualdad y respeto por las diferencias culturales de los pueblos indígenas.

Asimismo, destaca que la propuesta contribuye a la protección de los derechos culturales y lingüísticos, reconociendo la diversidad cultural del Perú, donde existen 55 pueblos indígenas con 48 lenguas originarias. Enfatiza que el acceso a la información en lenguas indígenas no solo facilita el ejercicio de este derecho fundamental, sino también otros derechos como el de

participación en asuntos públicos, dado que las personas podrían involucrarse más efectivamente en decisiones que afectan sus comunidades. En este contexto, se cita la obligación del Estado de facilitar los medios necesarios para asegurar la accesibilidad de la información pública en igualdad de condiciones.

La Defensoría concluye que el proyecto de ley es viable, con recomendaciones que subrayan la importancia de implementar políticas afirmativas que protejan a los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, al garantizarles el derecho a acceder a la información en su idioma.

La Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N.° 0300-2024-DP/PAD, de fecha 20 de junio de 2024, remite el Informe N.° 009-2023-DP/AAC, de fecha 23 de noviembre de 2023, elaborado por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto de ley 5429/2022-CR que propone modificar las leyes de transparencia y acceso a la información pública y de sistematización jurídica para garantizar que los pueblos indígenas puedan acceder a la información en sus lenguas originarias.

Al respecto, la Defensoría señala que la referida iniciativa legislativa, responde a la declaratoria del Tribunal Constitucional sobre el deber estatal de comunicarse en lenguas originarias donde sean predominantes, promoviendo la preservación y el uso de estas lenguas en todos los niveles de gobierno.

Argumenta que es necesario atender los derechos de las comunidades indígenas al incorporar un enfoque intercultural en la transparencia y el acceso a la información. Precisa que actualmente se advierte una limitación en la inclusión de minorías lingüísticas que no necesariamente son predominantes en ciertas regiones, pero que igualmente requieren acceso a información en su lengua para evitar la discriminación. Así, el informe sugiere la necesidad de garantizar el derecho al uso de la lengua en todas las comunidades, además de superar las barreras digitales y logísticas que enfrentan las poblaciones en zonas alejadas, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y las comunidades originarias.

En conclusión, el informe recomienda que el proyecto sea aprobado con observaciones, destacando su importancia en la promoción de la interculturalidad y el respeto a los derechos lingüísticos. Sugiere evaluar esta propuesta legislativa de manera conjunta con los proyectos de ley 5429/2022-CR y 6405/2023-CR.

- **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

La Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), mediante el **Oficio N.° 000504-2024-R-D/UNMSM**, de fecha 18 de abril de 2024, expresa el respaldo institucional al proyecto de ley 7412/2023-CR, que propone una modificación al numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de garantizar que la información pública sea accesible en la lengua originaria de los ciudadanos que lo soliciten, en atención a su derecho fundamental a la información.

El respaldo de la UNMSM se fundamenta en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de la población indígena, quienes enfrentan barreras para acceder a servicios públicos esenciales debido a la falta de traducción de información a sus lenguas originarias. Precisa que la propuesta busca, además, reducir la discriminación lingüística en Perú, promoviendo así una sociedad más inclusiva y participativa, conforme al artículo 2° numeral 5 de la Constitución Política del Perú que consagra el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

Finalmente, la UNMSM adjunta las opiniones especializadas de los directores de las Escuelas Profesionales de Lenguas, Traducción e Interpretación y de Lingüística, quienes subrayan la necesidad de asegurar que el Estado proporcione la información requerida en lenguas originarias tanto en formato oral como escrito, según las competencias del solicitante.

La Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mediante el **Oficio N.° 001070-2024-R-D/UNMSM**, de fecha 30 de julio de 2024, sobre el proyecto de ley 7412/2023-CR, que propone modificar el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que propone que, en caso de que una persona acredite que su único idioma es una lengua originaria, las entidades públicas estarán obligadas a proporcionar la información en dicho idioma, en cumplimiento con el derecho fundamental al acceso a la información pública consagrado en el artículo 2 numeral 5 de la Constitución del Perú.

La UNMSM resalta la relevancia de este proyecto para garantizar la inclusión y equidad en el acceso a la información pública en un país con gran diversidad lingüística. El acceso a la información en lenguas originarias se plantea como un medio necesario para erradicar la discriminación lingüística y promover una administración pública inclusiva, especialmente para poblaciones indígenas que enfrentan barreras significativas para acceder a servicios esenciales.

Finalmente, la UNMSM acompaña una opinión técnica elaborada por su Vicerrectorado Académico, la cual subraya la importancia de esta propuesta legislativa para la inclusión social y destaca el papel del Estado en asegurar el acceso igualitario a la información.

- **Ministerio de Cultura**

El Ministro de Cultura, mediante el Oficio N.° 001538-2024-DM/MC, de fecha 24 de octubre de 2024, remite el Informe N.° 001520-2024-OGAJ-SG/MC, de fecha 21 de octubre de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ley 7412/2023-CR, que establece la obligación de entregar información pública en lenguas originarias cuando el solicitante solo habla dicho idioma.

Al respecto, el Ministerio de Cultura señala que lo propuesto se fundamenta en el marco normativo nacional, como la Ley N° 29735, y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, los cuales reconocen los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas y su derecho a acceder a información pública en su idioma. Destaca la necesidad de adaptar los servicios públicos a la diversidad cultural y lingüística del Perú, donde existen 48 lenguas originarias habladas por más de 4 millones de personas; y que los hablantes de lenguas indígenas suelen encontrarse en situación de vulnerabilidad, agravada por barreras lingüísticas que dificultan su acceso a servicios estatales.

El Ministerio de Cultura respalda la iniciativa legislativa como una medida afirmativa para hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación, garantizando así el derecho a la identidad étnica y cultural. En conclusión considera viable el proyecto, aunque se sugiere una revisión integral de la Ley N° 27806 para asegurar coherencia en su aplicación; y que las entidades públicas se adapten progresivamente para brindar servicios en lenguas indígenas donde estas sean predominantes.

Proyecto de Ley 08066/2023-CR[21]

Se solicitó opinión sobre el proyecto de ley 8066/2023-CR a las siguientes entidades:

Cuadro 26
Opiniones solicitadas respecto del
Proyecto de Ley 8066/2023-CR

N.°	OFICIO N.°	ENTIDAD/ESPECIALISTAS	FECHA DE ENVÍO

[21] Expediente virtual del proyecto de ley 8066/2023-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/8066

1	1711-2023-2024-CCR/CR	ÁLVARO HENZLER VERNAL Presidente de Transparencia Perú	26/06/2024
2	1712-2023-2024-CCR/CR	GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA Presidente del Consejo de Ministros	26/06/2024
3	1713-2023-2024-CCR/CR	EDUARDO MELCHOR ARANA YSA Ministro de Justicia y Derechos Humanos	26/06/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

A la fecha, esta Comisión ha recibido respuesta a las solicitudes de opinión formuladas respecto del proyecto de ley 8066/2023-CR, conforme el siguiente detalle:

- **Presidencia del Consejo de Ministros**

La Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Oficio D001658-2024-PCM-SG, de fecha 15 de agosto de 2024, remite el Informe N° D001214-2024-PCM-OGAJ,de fecha 15 de agosto de 2024, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, que analiza el proyecto de ley 8066/2023-CR, que introduce cambios en el acceso a información confidencial y en los costos de reproducción de la información requerida.

Al respecto, la PCM considera que el proyecto trata materias que no le corresponden, ya que involucran directamente a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía y Finanzas. Asimismo precisa que su rol está enfocado en la coordinación de políticas nacionales, mientras que los temas de confidencialidad de información y estructura de tasas para documentos recaen en el ámbito normativo de los ministerios mencionados.

En conclusión, la PCM aclara que la evaluación del proyecto de ley debe ser asumida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de acceso a información y confidencialidad, y por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo relativo a costos de reproducción.

2.1.2. Opiniones ciudadanas

A la fecha se registran opiniones ciudadanas de los proyectos de ley según se detalla a continuación.

2.1.2.1 Proyecto de ley 1974/2021-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.2 Proyecto de ley 2261/2021-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.3 Proyecto de ley 3841/2022-CR

Cuadro 27
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 3841/2022-CR

A FAVOR		Total: 1
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
28/12/2022	**JUAN EDGARDO FERNANDEZ VEGA**	¿Agradecería absolver una duda que tengo y es que el Estado Peruano reconoce a Gobierno Regional y Gobiernos Locales, pero este Proyecto de Ley se aplica a Gobiernos de Centros Poblados? Esta duda nace desde que no se menciona expresamente a Centros Poblados, pero menciona que se aplica a toda autoridad elegida por voto popular. Muchas gracias por la atención.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.4 Proyecto de ley 4046/2022-CR

Cuadro 28
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 4046/2022-CR

A FAVOR		Total: 2
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
29/01/2023	**CONSUELO JEOVANY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**	Excelente iniciativa a la verdad Pública, convendría incorporar la publicidad de la carga laboral de cada servidor del MINSA.

25/04/2023	**NESTOR VICENTE CHUQUIBALA HUAMAN**	Que se cumpla con rigurosidad todos los procedimientos y que se apruebe en beneficio de todos los trabajadores CAS que venimos percibiendo sueldos tan míseros.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.5 Proyecto de ley 4522/2022-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.6 Proyecto de ley 5429/2022-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.7 Proyecto de ley 5602/2022-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.8 Proyecto de ley 5697/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.9 Proyecto de ley 6002/2023-CR

Cuadro 29
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 6002/2022-CR

A FAVOR		Total: 1
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
01/10/2023	**EVERT RICARDO OBESO VILLAZON**	Considero que es necesario regular el tema propuesto, sin embargo, es necesario mejorar la redacción del mismo, debido a que deben ordenarse uno a uno las obligaciones que genera en la entidad para garantizar el acceso directo regulado por el artículo 12 de la Ley 27806: 1. La obligación de informar y/o el día en que el solicitante debe acercarse a las instalaciones de la entidad para dar lectura a la información, dentro del horario laboral, de lo cual debe dejar constancia y acreditarlo. 2. El acceso directo permite al solicitante dar lectura a la información, realizar transcripciones, hacer resúmenes, tomar fotografías u otros similares. Para ello es oportuno revisar la Resolución Nº 010300482019 emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a

		la Información Pública. (https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1483299-010300482019) principalmente, pero también pueden revisar las resoluciones siguientes: 1) https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/3721654-000431-2022-jus-ttaip-segunda-sala 2) https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/4186709-000630-2023-jus-ttaip-primera-sala 3) https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/3761775-001617-2022-jus-ttaip-segunda-sala 4) https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/4147036-003309-2022-jus-ttaip-segunda-sala En dichas resoluciones pueden encontrar mayor sustento para la propuesta, puesto que es importante consignar en la norma los atributos que me brinda el acceso directo, puesto que no norma no lo indica aunque el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo ha desarrollado en sus múltiples casos, como de forma enunciativa he citado algunos, pero que pueden revisar más casos en su enlace web:https://www.gob.pe/11846-ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-tribunal-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Saludos cordiales

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.10 Proyecto de ley 6011/2023-CR

Cuadro 30
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 6011/2023-CR

A FAVOR		Total: 1
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
01/10/2023	**EVERT RICARDO OBESO VILLAZON**	Estoy de acuerdo con la propuesta para que se puede efectuar pedidos de forma verbal, pero a la vez considero que debería justificarse adecuadamente si ello no genera costo adicional a las entidades, puesto que para dejar constancia del pedido verbal se requiere personal (horas hombre = presupuesto) para que atiendan dichos pedidos. Sin perjuicio de ello, me permito señalar que el artículo 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México dispone la posibilidad de presentar solicitudes de acceso a la información de manera verbal, conforme al siguiente texto: "Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional."
PROPUESTA ALTERNATIVA		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**

02/10/2023	**MARIA DEL ROSARIO FLORES PACHECO**	Buenas Tardes, respecto a esta propuesta no considero viable, debido a que no todas las entidades cuentan con personal exclusivo como responsable de la información pública, la mayoría de veces el usuario a pesar que solicita no es claro en precisar su requerimiento, generando demora para dar respuesta a lo peticionado, o en cado contario realizan un exceso en hacer sus pedidos, por ejemplo piden copia de boletas de año 2019 a 2022, copia de informe de algún asunto no especifican ni fecha, si es verbal quien lo va recepcionar, en donde va hacer esa recepción, si generalmente los encargados de información pública están en adición a sus funciones, Propuesta alternativa: que sea de carácter obligatorio que las entidades generen la recepción de la solicitud, en forma virtual bajo un formato pre establecido, donde se especifique el asunto, medio, fecha de lo peticionado, y a su vez una guía del llenado del pedido y que tipo de información puede ser atendido por este medio.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.11 Proyecto de ley 6013/2023-CR

Cuadro 31
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 6013/2023-CR

A FAVOR		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
29/09/2023	**JOSSELIN YAMIRA ESPINOZA FERNANDEZ**	Considero importante respetar el modo escogido por el ciudadano al momento de crear su solicitud de acceso a la información pública (SAIP); debido a que, dicha solicitud atiende a una necesidad del ciudadano, y la Entidad Pública tiene el deber de responder, siempre y cuando tenga al alcance la información y la solicitud no recaiga en una de las excepciones de los artículos 15 a 17 - de manera concisa y rápida.
04/10/2023	**JUANA JUDIT MUÑOZ ASENJO**	El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad en un plazo no mayor de 7 días. Por qué este plazo, porque muchas veces se necesita de esa información para responder a trámites judiciales donde los plazos son de hasta 10 días, no quiero decir con ello que servirán necesariamente de prueba, pero si saber que está cursando la entidad a la cual estás emplazando. Espero se entienda lo que quiero decir. Además, debe haber una sanción establecida, ya que en mi experiencia hay entidades que brindan la información cuando se les antoja al mes o después aún.
EN CONTRA		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
	EVERT RICARDO OBESO VILLAZON	Considero que sobre el medio o forma de entrega de la información ya existe regulación conforme lo dispone el sexto párrafo del artículo 13

30/09/2023		"Denegatoria de información" de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al disponer lo siguiente: "No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el pedido." La propuesta legislativa solo se enfoca en la información requerida de forma virtual o digital, empero la mencionada Ley 27806 es más amplía, al regular de manera general todas las formas y medio en que se puede requerir la información. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ya lo ha zanjado en muchísimos casos, como de manera ilustrativa podemos citar el EXP. N° 01011-2018-PHD/TC. De igual modo, en el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en muchos casos e inclusive ha aprobado el criterio 6 a través de los Lineamientos Resolutivos 2021, aprobado mediante la Resolución de Sala Plena 000001-2021-JUS/TTAIP-SP, el cual dispone: "6. Las entidades se encuentran en la obligación de proporcionar la información solicitada en la forma requerida, pudiendo ser en copia simple, copia fedateada, copia certificada, archivo digital, enlace para descarga, entre otros; la entrega de la documentación en una forma distinta a la solicitada, no satisface el derecho de acceso a la información pública.", lo cual se puede descargar desde el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4230538/Resoluci%C3%B3n%20de%20Sala%20Plena%202021.pdf.pdf?v=1678303027 Por dichas consideraciones, no tiene sustento legal para sobrerregular el tema, puesto que actualmente la regulación es mucho mejor y abierta a todo tipo de formas en que se requiera la información por parte de los ciudadanos.
PROPUESTA ALTERNATIVA		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
02/10/2023	**BORJA LÓPEZ LASALA**	La información solicitada YA se entrega virtualmente cuando se solicita, de hecho, a mí me la entregan siempre así desde siempre. Este proyecto quiere regular algo que ya existe.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.12 Proyecto de ley 6041/2023-CR

Cuadro 32
Consolidado de las opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 6041/2023-CR

A FAVOR		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
11/10/2023	**BENJAMIN ATUSPARIA DE LA CRUZ CHATTE**	Excelente proyecto de ley, ya que invita a los ciudadanos que puedan acceder a la información pública de una manera fácil y sencilla sin la necesidad de contar con la firma de un abogado en la apelación

		administrativa, siendo este pedido de información un derecho fundamental contemplado en la constitución de 1 993. Por otro lado, promueve e impulsa la participación ciudadana mediante la transparencia pública al poder conocer en que se usa y distribuye el presupuesto público, otorgando una fiscalización social a los ciudadanos en aras de evidenciar y disminuir la corrupción pública.
11/10/2023	**JOSE MANUEL MARTIN CORONADO**	Es un excelente proyecto de ley, ya que normalmente los recursos de apelación siempre han requerido la necesidad de contratar un abogado debido a que puede haber una discusión jurídica de por medio. Sin embargo, de manera acertada, el proyecto de Ley trata de facilitar el acceso al derecho a la información en los casos precisos de silencio negativo por retardo de atención de la solicitud y de excepciones en razón de la apreciación respecto a la confidencialidad de la información. En estos casos especiales, requerir los servicios de un abogado para agregar fundamentos jurídicos superficiales y de Perogrullo genera costos innecesarios a los administrados. Efectivamente, este proyecto promueve la participación ciudadana mediante la transparencia pública y la fiscalización social en aras de evidenciar y disminuir la corrupción pública. José Manuel Martin Coronado EMAE Abogados Economistas.
EN CONTRA		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
04/10/2023	**EVERT RICARDO OBESO VILLAZON**	Buenos días. El proyecto de ley no cuenta con una motivación que explique las razones jurídicas para la necesidad de regular la no obligatoriedad de firma de abogado para presentar un recurso de apelación contra la denegatoria de una solicitud de acceso a la información pública, es más, a la fecha el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información pública no lo exige, como tampoco existe norma que exija dicho requisito.
PROPUESTA ALTERNATIVA		**Total: 1**
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
02/10/2023	**BORJA LÓPEZ LASALA**	Para solicitar información pública o apelar la denegatoria nunca ha sido necesaria la firma de abogado.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.13 Proyecto de ley 6156/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.14 Proyecto de ley 6157/2023-CR

Cuadro 33

Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 6157/2023-CR

PROPUESTA ALTERNATIVA		Total: 1
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
10/11/2023	**DIEGO ANGEL YAURI TACUCHI**	De acuerdo a mi valoración La presente ley va de acuerdo a lo que establece en principio a la Constitución Política del Perú. A pesar de contar con un Portal de Transparencia Estándar (PTE) del Estado peruano. Aun así, muchas entidades presentan trabas engorrosas que no permiten ejecutar solicitudes o indagar en la información pública de manera óptima. Con esta incorporación se estaría siendo frente a la constante evolución y cambio a la digitalización con el derecho al acceso de información pública debido a que más del 60% de municipios no tienen plataformas virtuales de acceso a la información pública operativas. Se puede considerar que esta ausencia de formatos virtuales son trabas que obstaculizan a los ciudadanos que quieren presentar una solicitud por estos medios, lo cual es una barrera al derecho del acceso a la información pública consagrado en la Constitución en estos tiempos del gran avance digital. Por otra parte, con respecto a la gratuidad discrepo con lo que quiere establecer la congresista, puesto que desde un panorama de Política Fiscal y tributario las tasas cumplen una finalidad importante recaudadora, y de acuerdo al Código Tributario son pagos por el servicio individualizado que hace el Estado a favor de la persona, y tal como lo dice la ley solo se paga por el costo de reproducción, mas no por la información en sí. Cabe recalcar que el inciso 5, del artículo 2 reconoce este derecho fundamental pero también menciona expresamente que se deba pagar el costo que origine al pedirlo (reproducción). Teniendo en cuenta que es un precio accesible al público en general, ya que el costo para solicitarlo de manera presencial va desde el cargo de 10 céntimos por hoja.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.15 Proyecto de ley 6405/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.16 Proyecto de ley 6483/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.17 Proyecto de ley 6484/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.18 Proyecto de ley 6631/2023-CR

Cuadro 34
Opiniones solicitadas respecto del Proyecto de Ley 6631/2023-CR

PROPUESTA ALTERNATIVA		Total: 1
Fecha	**Ciudadano**	**Opinión**
12/12/2023	**YURY BETSABETH DIAZ CONDORI**	Buenas tardes: Se debe tener en cuenta que la LTAIP establece en su artículo 11, literal b), un plazo máximo de diez días hábiles para que las entidades otorguen la información solicitada por los ciudadanos. Asimismo, prevé en el literal g) del citado artículo, concordancia con el artículo15B del Reglamento, que cuando sea materialmente imposible cumplir dicho plazo, debido a causas justificadas relacionadas a la comprobada y manifiesta falta de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o al significativo volumen de la información solicitada, excepcionalmente y por única vez, la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el pedido de información, definiendo además los supuestos que configuren Falta de capacidad logística, operativa y de personal. Cabe precisar que, el Reglamento, en su artículo 15B., numeral 15B.4, faculta al ciudadano que no se encuentra conforme con la respuesta de la entidad, por considerarla una negativa o vulneración de su derecho, al no estar debidamente fundamentado; a recurrir al fuero del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ej. Resolución N° 020303102020 de fecha 21.09.2020) Como se puede apreciar, la normativa nacional ya estipula los plazos generales y especiales de atención de un pedido de AIP, exigiendo que la entidad informe al ciudadano el plazo especial que demandará su atención, así como las razones debidamente fundamentadas. Además, ya prevé la participación del Tribunal a pedido del ciudadano. De otro lado, si aun así, se pretende cuantificar el plazo adicional, este debe ir de la mano con los plazos adicionales que mayoritariamente ha convenido la legislación comparada (15 días hábiles). Por tanto, resulta incoherente proponer un plazo menor, amparándose en normas internacionales que llegan hasta los 40 dh.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

2.1.2.19 Proyecto de ley 7077/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.20 Proyecto de ley 7412/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

2.1.2.21 Proyecto de ley 8066/2023-CR

En el expediente virtual del referido proyecto de ley no constan registros de opiniones ciudadanas.

III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

3.1. Contenido de la propuesta

A continuación, se resume el contenido y alcance de las propuestas legislativas de los proyectos de ley.

3.1 El proyecto de ley **1974/2021-CR**, propone modificar la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1416, que fortalece el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), el cual modificó el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N.° 021-2019-JUS, para adecuar el plazo para interponer el recurso de apelación a la ley común del procedimiento administrativo a fin de generar seguridad jurídica.

3.2 El proyecto de ley **2261/2021-CR**, propone modificar el artículo 5 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 113 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para disponer la publicidad de las actas de sesión de los órganos colegiado de las entidades de la Administración Pública en su portal de Transparencia Estándar.

3.3 El proyecto de ley **3841/2022-CR,** propone modificar los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el objetivo de promover el fortalecimiento de la

labor de fiscalización en los gobiernos municipales y regionales. Busca establecer que los funcionarios o servidores públicos que incumplan con las disposiciones de la Ley 27806, sean sancionados por la comisión de una falta grave; y, en el caso de los funcionarios por elección popular que no cumplan con entregar la información solicitada sean suspendidos por un período de sesenta (60) días naturales y de noventa (90) días naturales en caso de reiteración, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal. Asimismo, busca disponer que en caso que no se haya designado un funcionario responsable, las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces, y en el gobernador regional y alcaldes, en el caso de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales.

3.4 El proyecto de ley **4046/2022-CR**, propone incorporar el artículo 10-A a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que todos los establecimientos y redes de salud de todo nivel de atención públicos y privados, estén obligados a publicar información en internet y vía telefónica sobre citas médicas, camas hospitalarias, disponibilidad de salas, entre otros datos. Tiene como finalidad fortalecer la transparencia en el sistema de salud peruano, a través de una efectiva rendición de cuentas a los ciudadanos que fortalece el sistema democrático.

3.5 El proyecto de ley **4522/2022-CR**, propone modificar los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para establecer que los funcionarios o servidores públicos de cualquier régimen laboral que no cumplan con las disposiciones de esta ley, además de ser sancionados por la comisión de una falta grave, se le iniciará de oficio a petición de parte, y en el caso de ser funcionario por elección popular sean suspendidos por un periodo de sesenta (60) días naturales y de (90) días naturales en caso de omisión de incumplimiento reiterado; asimismo el funcionario responsable remitirá los medios probatorios al Ministerio Público para el inicio de investigaciones por delito de abuso de autoridad.

3.6 El proyecto de ley **5429/2022-CR**, propone modificar los artículos 3 y 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 9 de la Ley 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, para establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información

considerando la diversidad cultural del país y en particular las características culturales, lingüísticas y geográficas de los pueblos indígenas u originarios.

3.7 El proyecto de ley **5602/2022-CR,** propone modificar el artículo 4 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que la denuncia penal contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las disposiciones de la mencionada Ley, también se aplique el Decreto Legislativo N.° 1194, Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. Sumado a ello, precisa que la obligación de denunciar recaería en la segunda instancia administrativa.

3.8 El proyecto de ley **5697/2023-CR**, propone modificar los artículo 5 y 39 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que las entidades de la administración pública de manera progresiva difunda a través de internet información sobre funcionarios y servidores obligados a presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, así como la declaración jurada de intereses, hoja de vida y acceso al texto de las tesis y/o trabajos de investigación con los que optaron los grados de maestro y doctor. Tiene como finalidad garantizar la probidad e idoneidad de los funcionarios y servidores del Estado.

3.9 El proyecto de ley **6002/2023-CR**, propone modificar el artículo 12 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que las entidades de la administración pública darán las facilidades para que los ciudadanos directamente registren digitalmente a través de sus equipos celulares los documentos requeridos y sin ningún costo para ellos. De igual manera busca autorizar el uso de links de carga y descarga, USB, envío por correo electrónico o mensajería digital, o cualquier otra herramienta tecnológica, sin generar costo alguno para el ciudadano.

3.10 El proyecto de Ley **6011/2023-CR**, propone modificar el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que toda persona tendrá derecho a solicitar por escrito o de forma verbal, y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. Asimismo, señala que las solicitudes deben ser registradas por la mesa de partes física de la entidad, la que de manera inmediata deberá entregar un cargo de recepción al ciudadano un cargo de recepción al ciudadano.

3.11 El proyecto de ley **6013/2023-CR**, propone modificar el artículo 13 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que, si el ciudadano requiere que la información pública sea remitida de manera virtual al domicilio electrónico consignado en su solicitud, la entidad está obligada a cumplir con el modo de envío solicitado; con la finalidad de agilizar los procesos de notificación y evitar los obstáculos geográficos y económicos.

3.12 El proyecto de ley **6041/2023-CR**, propone modificar el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que no es necesario que el escrito de apelación administrativa cuente con la firma de un abogado.

3.13 El proyecto de ley **6156/2023-CR**, propone modificar el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para precisar que no sea necesaria la firma de abogado en la solicitud de acceso a la información pública en primera instancia administrativa, con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública.

3.14 El proyecto de ley **6157/2023-CR**, propone modificar el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que la entrega de información pública sea gratuita, cuando el ciudadano solicite que esta sea remitida virtualmente a su domicilio electrónico.

3.15 El proyecto de ley **6405/2023-CR**, propone incorporar el numeral 4 en el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que "*el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información considerando la diversidad cultural del país, en particular las características socioculturales, lingüísticas y geográficas de los pueblos indígenas u originarios*"; con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública para los pueblos indígenas u originarios.

3.16 El proyecto de ley **6483/2023-CR**, propone modificar el artículo 10 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, para fortalecer la transparencia de las carpetas fiscales y expedientes judiciales en etapa de juicio oral. Asimismo, busca establecer que en los delitos contra la administración pública, no se aplique ninguna de las excepciones establecidas en la presente ley y se restrinja el derecho a la intimidad.

3.17 El proyecto de ley **6484/2023-CR**, propone modificar el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, para establecer que el importe que abona el solicitante para la reproducción de la información pública requerida corresponda a los costos comerciales, que estarán consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la administración pública.

3.18 El proyecto de ley **6631/2023-CR**, propone modificar la letra "g" del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que *"(...) por vez única la entidad puede entregar la información en un plazo máximo de siete días hábiles adicionales, para lo cual debe solicitar autorización al Tribunal de Transparencia y acceso a la Información Pública, dentro del plazo de cinco días hábiles de recibida la solicitud de información*", y que ese pedido de autorización debe ser respondido por el Tribunal en un plazo máximo de tres días hábiles. Tiene como finalidad que sea la ley, la que determine el periodo de tiempo, en el cual se prorrogará excepcionalmente el plazo para entregar la información.

3.19 El proyecto de ley **7077/2023-CR**, propone agregar el literal g) al artículo 16 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para clasificar como reservada la información generada en la etapa de investigación preparatoria realizada por el Ministerio Público y sus órganos de apoyo, cuando su divulgación compromete los fines de dicha investigación o afecta el honor, la intimidad, la seguridad o la vida de los sujetos procesales.

3.20 El proyecto de ley **7412/2023-CR**, propone modificar el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer que "*Cuando la persona acredite que su único idioma es una lengua originaria, la entidad pública está en la obligación de entregar la información en dicha lengua originaria*". Tiene como objeto eliminar la discriminación de acceso a la información pública, facilitando que se otorgue en la lengua originaria de la persona peticionante.

3.21 El proyecto de ley **8066/2023-CR**, propone modificar los literales 2) y 3) del artículo 15-B y el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer dos excepciones de la información calificada confidencial, "(...) *con la finalidad de optimizar el principio de transparencia y máxima divulgación, restringiendo las excepciones de acceso de la información pública de manera proporcional al interés y las necesidades que las justifican en estricta correspondencia*

con el propósito por el cual han sido establecidas en un Estado Constitucional de Derecho". También busca uniformizar los costos de reproducción de la información en todas las entidades del Estado, sin excepción alguna para establecer una tasa de reproducción real que únicamente incluya los gastos en que incurra la entidad para darle predictibilidad, igualdad y seguridad jurídica al ciudadano.

IV. MARCO NORMATIVO

4.1 Constitución Política

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
[...]
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (Subrayado agregado)

[...]

4.2 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del dos de agosto del año dos mil dos.

Artículo 1.- Alcance de la Ley

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. (Subrayado agregado)

[...]

4.3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM del veintidós días del mes de abril del año dos mil tres.

Artículo 1.- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consta de cuatro (4) Títulos, dos (2) Capítulos, treinta y seis (36) Artículos, y tres (3) Disposiciones Transitorias,

Complementarias y Finales, que forman parte integrante del referido Decreto Supremo.

V. ANÁLISIS TÉCNICO

A continuación, se analiza la viabilidad de los proyectos de ley.

5.1 Análisis del Proyecto de Ley 1974/2021-CR que plantea modificar la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N° 1416.

Mediante la presente propuesta normativa conforme se señala en su título se busca modificar la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N° 1416 que fortalece el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, su contenido es totalmente distinto; puesto que plantea en realidad modificar el literal e) de[artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que el título del Proyecto de Ley y la fórmula normativa no son coherentes, por lo que sugieren reformularse el primero, máxime si una Ley Modificatoria no debe modificar leyes del mismo tipo, sino a la ley originaria.

La Defensoría del Pueblo señala que la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1416, que fortalece el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), modificó el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, estableciendo disposiciones para la interposición de recursos de apelación en la materia. En ese sentido, consideran que el objeto del proyecto es modificar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no su norma modificatoria (DL 1416).

Sobre la propuesta planteada de que se pueda solicitar verbalmente el pedido de acceso a la información pública en las diferentes entidades públicas, la Comisión estima que conforme está planteado el proyecto de ley no es viable, por cuanto existe una evidente incongruencia en su título con su contenido; puesto que en su título se indica que se busca modificar la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1416 que fortalece el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, su contenido es totalmente distinto; puesto que plantea en realidad modificar el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

5.2 Análisis del Proyecto de Ley 2261/2021-CR que plantea modificar el Artículo 5° en su numeral 5 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el Artículo 5° en su numeral 5 de la de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de que las entidades de la Administración Pública establezcan las actas de los órganos colegiados de la entidad; y, asimismo plantea modificar el artículo 113° de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General con el objeto de que el Acta aprobada sea publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad pública; y, que solo en el caso de que el acta contenga información pública expresamente clasificada como secreta, reservada o confidencial, deberá ser protegida mientras dure el impedimento; con la finalidad de disponer la publicidad de las actas de sesión de los órganos colegiados de las entidades de la Administración Pública en su Portal de Transparencia Estándar.

La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha opinado que el Proyecto de Ley 2261/2021-CR, Proyecto de Ley que promueve la publicidad de las Actas de sesión de los órganos colegiados de la administración pública, resulta jurídicamente viable con la observación a su artículo 3, el cual debe establecer la modificación al artículo pertinente de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y no así al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como se propone; y, que el Proyecto de Ley no cumple con todos los requisitos de calidad normativa y técnica legislativa, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa y su Reglamento. De manera concreta, no cumple con los siguientes aspectos: i) título de la disposición y ii) exposición de motivos (análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma, y análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional).

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el Artículo 5° en su numeral 5 de la de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de que las entidades de la Administración Pública establezcan las actas de los órganos colegiados de la entidad; y, asimismo plantea modificar el artículo 113° de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General con el objeto de que el Acta aprobada sea

publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad pública; la Comisión estima que no es viable, por cuanto la referida propuesta es inoficiosa e innecesaria al estar ya establecido y normado en el Artículo 10° de información de acceso público de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establece que las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida referida a las actas de reuniones oficiales; donde evidentemente se encuentran incluidas las actas de los órganos colegiados.

5.3 Análisis del Proyecto de Ley 3841/2022-CR que plantea modificar los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como modificar el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como modificar el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; con la finalidad de promover el fortalecimiento de la labor de fiscalización en los gobiernos municipales y regionales.

El Secretario del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que el proyecto de ley tiene como uno de sus objetivos que se fortalezca la fiscalización ejercida en muchos casos por los miembros del Consejo Municipal y del Consejo Regional; sin embargo, indica que se debe recordar que el pedido de información realizado por dichos funcionarios en dicha calidad debe ser canalizado en el ejercicio de su función fiscalizadora —esto es, regidor municipal o consejero regional—, lo cual es una prerrogativa regulada por el numeral 7 del artículo 10 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el literal e) del artículo 16 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y, asimismo considera que las faltas y/o infracciones a las prerrogativas de los regidores municipales y consejeros regionales, deben propiciar una evaluación para la mejora de las normas reguladas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-ANGR señala que la iniciativa legislativa en comentario tiene por finalidad modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades con el fin de promover el fortalecimiento de la labor de fiscalización en los gobiernos municipales y regionales. La propuesta de modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que en el caso de los

funcionarios por elección popular que no cumplan con entregar la información solicitada sean suspendidos por un periodo de 60 días y de 90 días en caso de reiteración. Adicionalmente, en lo que respecta a las entidades obligadas a informar, se precisa que en caso no se hubiera designado al funcionario responsable de brindar la información solicitada en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, las responsabilidades administrativas y penales recaería en el gobernador regional y alcaldes, lo cual es incluido en el procedimiento. Por otro lado, indica, la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades está referida a la suspensión del cargo de alcalde 60 días o de 90 días en caso de reiteración como consecuencia de no entregar la información solicitada, conforme lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la misma línea, señala que la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales propone que en caso el gobernador regional no cumpla con entregar la información solicitada, según lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le suspenderá del cargo por un periodo de 60 o 90 días en caso de reiteración. En ese sentido, indica que se pretende sancionar dos veces el mismo supuesto dado que el artículo 377 del Código Penal que es conforme con el artículo 4 del TUO de la Ley 27806 sancionan con pena privativa de la libertad a la omisión de los funcionarios públicos en cumplir con sus deberes de transparencia. En consecuencia señalan su desacuerdo con el proyecto de ley en mención por plantear una nueva sanción a un supuesto regulado en el Código Penal.

La Defensoría del Pueblo señala que cuando los consejeros/as regionales y regidores/as provinciales y distritales requieren información se encuentran ejerciendo una facultad o prerrogativa vinculada a su labor de fiscalización, y no un derecho, por lo que no resulta aplicable la Ley 27806. Por ello, consideran que la propuesta legislativa no resulta viable. Finalmente, indica que se deberán evaluar las modificaciones que requieran tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de establecer claramente las responsabilidades administrativas que pudieran recaer en los alcaldes y/o gobernadores ante el incumplimiento de la entrega de información a consejeros/as regionales y regidores/as provinciales y distritales, sin que ello signifique la aplicación del régimen de sanciones establecido en la Ley 27806, puesto que este último no es aplicable a las labores de fiscalización que realizan los referidos funcionarios.

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que el objeto de la propuesta normativa no se condice con su finalidad. Indica que, si se pretende fortalecer la labor de fiscalización en los gobiernos regionales y locales, ello no puede alcanzarse modificando la LTAIP, que regula el derecho fundamental de acceso a la información

pública, sino la LOGR y LOM que establece un régimen de acceso a la información para los integrantes del Consejo Regional y Concejo Municipal. Los derechos fundamentales son diferentes a las facultades que la Ley reconoce a las autoridades; añade que resulta viable regular sanciones aplicables a los gobernadores regionales y alcaldes por el incumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, señala que ello no debería realizarse modificando el artículo 4 de la LTAIP, sino las disposiciones de la LOM y LOGR y, en el caso de las municipalidades, además, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de cada entidad. En estos dispositivos se podría tipificar como falta grave el incumplimiento de las obligaciones de transparencia exigibles al titular de la entidad. Concluye considerando que el "Proyecto de Ley N° 3841/2022-CR Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para promover el fortalecimiento de la labor de fiscalización en los gobiernos locales y regionales", no resulta viable.

Sobre la propuesta planteada de que se modifiquen los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como se modifique el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la finalidad de promover el fortalecimiento de la labor de fiscalización en los gobiernos municipales y regionales, estableciendo que en el caso de los funcionarios por elección popular que no cumplan con entregar la información solicitada serán suspendidos por un período de sesenta (60) días naturales y de noventa (90) días naturales en caso de reiteración; y, asimismo que las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces, y en el gobernador regional y alcaldes, en el caso de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales; y, asimismo que cuando la información sea solicitada a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, el requerimiento de información deberá ser dirigida a los alcaldes y gobernadores regionales; la Comisión estima que la propuesta en los términos planteados no es viable, por cuanto las modificaciones planteadas deberían estar orientadas a la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y no a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; puesto que los derechos fundamentales son diferentes a las facultades que la Ley reconoce a las autoridades y las sanciones por su incumplimiento.

5.4 Análisis del Proyecto de Ley 4046/2022-CR que plantea incorporar el artículo 10-A a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mediante la presente propuesta normativa se busca incorporar el artículo 10-A a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la información

de libre acceso del sistema de salud; señalándose que todos los establecimientos y redes de salud de todo nivel de atención, públicos y privados, tienen la obligación de informar, en tiempo real, a través de los portales de transparencia, líneas telefónicas, redes sociales y otros medios de la disponibilidad de citas médicas, disponibilidad de camas hospitalarias, de salas de cirugía e instrumentos quirúrgicos de alta gama, de equipos e instrumentos especializados como tomógrafos, resonadores magnéticos, rayos X, desfibriladores, entre otros.

La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que el Proyecto de Ley denota una preocupación de la representación congresal por la transparencia en materia de salud, sin embargo, indica que la ubicación del nuevo artículo 10-A propuesto, que contiene obligaciones de transparencia pasiva, en el título III dedicado a las normas generales sobre el acceso a la información pública o transparencia pasiva, quiebra la sistematicidad del articulado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, se precisa que, a juicio de esa Autoridad, la ubicación del dispositivo legal propuesto en un título dedicado a las normas generales sobre el acceso a la información pública del Estado o transparencia pasiva, quiebra la sistematicidad del articulado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, que todo texto legal debe estar organizado sistemáticamente y responder a la lógica, coherencia y claridad que aconseja la técnica legislativa. Así, por ejemplo, cada título agrupa artículos que tienen un contenido temático homogéneo, es decir, que comparten características comunes.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud señala que en los ámbitos público y privado resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 15.2 del artículo 15 de La Ley 29414, "Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud", según el cual toda persona tiene derecho a lo siguiente: 15.2 Al acceso a la información "(...)" i) A conocer en forma veraz, completa y oportuna las características del servicio, los costos resultantes del cuidado médico, los horarios de consulta, los profesionales de la medicina y demás términos y condiciones del servicio. Asimismo, indica que el artículo 13 del Reglamento de la ley Nº 29414, "Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud", establece que toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Asimismo, podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria. En tal sentido, se señala que de las normas antes

mencionadas se advierte que, el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud de acceder a la información, se encuentra establecida en la Ley N° 29414 y su reglamento, puesto que, al establecerse el derecho del usuario del servicio de salud a conocer sobre las características del servicio y demás términos y condiciones del mismo se genera la obligación por parte de los establecimientos de Salud, ya sean públicos o privados, de brindar toda la información referente a los servicios brindados, teniendo en cuenta que, el servicio de salud es la actividad que satisface una necesidad en salud. En consecuencia, se indica que lo propuesto por el legislador en el artículo 10-A, respecto a la obligación de brindar información en relación a la disponibilidad de citas médicas, camas hospitalarias, salas de cirugía e instrumentos quirúrgicos de alta gama, equipos e instrumentos especializados, exámenes de laboratorio, exámenes y procedimientos de ayuda diagnóstica, ambulancias, personal de salud, incluyendo especialistas y personal de guardia, cantidad de medicamentos, ya se encuentra establecida en las normas antes citadas. Concluye indicando que de la normativa antes mencionada se puede advertir que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una norma que únicamente resulta aplicable a las instituciones públicas y no a las entidades privadas. Es en dicho ámbito que toda entidad de la Administración Pública tiene la obligación de brindar información que se encuentre en su posesión cuando un ciudadano la solicite, sin expresión de causa alguna salvo las excepciones que establezca la ley. En consecuencia, considerando que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado, comprendiendo en sus alcances solo la obligatoriedad a las Entidades Públicas, por lo que, al incluirse en el proyecto de ley la incorporación de la obligatoriedad de los establecimientos de salud privados de informar, en tiempo real a través de sus portales de transparencia, líneas telefónicas, redes sociales y otros medios digitales no resulta compatible con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por cuanto dicha obligatoriedad de entrega de información solo corresponde a los establecimientos públicos más no, a los establecimientos privados.

Sobre la propuesta planteada de incorporar el artículo 10-A a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la información de libre acceso del sistema de salud; señalándose que todos los establecimientos y redes de salud de todo nivel de atención, públicos y privados, tienen la obligación de informar, en tiempo real, a través de los portales de transparencia, líneas telefónicas, redes sociales y otros medios de la disponibilidad de citas médicas, disponibilidad de camas hospitalarias, de salas de cirugía e instrumentos quirúrgicos de alta gama, de equipos e instrumentos especializados como tomógrafos, resonadores magnéticos, rayos X, desfibriladores, entre otros; la Comisión estima que no resulta viable, por cuanto el derecho de las personas

usuarias de los servicios de salud de acceder a la información, se encuentra ya establecida en la Ley 29414 y su reglamento; y, asimismo por el hecho de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una norma que conforme a lo estipulado en sus artículos 1° y 2° únicamente resulta aplicable a las instituciones públicas y no a las entidades privadas; como son las clínicas, consultorios y establecimientos médicos que son de propiedad de personas naturales y jurídicas de derecho privado.

5.5 Análisis del Proyecto de Ley N° 04522/2022-CR que plantea modifica los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como la modificación del artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y del artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como la modificación del artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y del artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; estableciéndose en la modificatoria del artículo 4° que los funcionarios o servidores públicos indistintamente de su régimen laboral que omitan o incumplieran con las disposiciones a que se refiere la referida Ley, serán sancionados por la comisión de una falta grave, y la investigación se inicia de oficio o a petición de parte; y, que en el caso de los funcionarios por elección popular, serán suspendidos por un periodo de sesenta (60) días naturales y de noventa (90) días naturales en caso de omisión o incumplimiento reiterado; la conducta reiterada u omisiva de los funcionarios o servidores públicos al cumplimiento de la ley en mención, el representante legal de la entidad bajo responsabilidad sin más trámite remitirá oficio adjuntando los medios probatorios al ministerio público de su jurisdicción a fin de iniciar las investigaciones a los responsables por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal; y, en el caso del artículo 8° que las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el caso de los gobiernos regionales, en el gobernador regional y en las municipalidades provinciales y distritales en los alcaldes; a quienes se les deberá dirigir los pedidos de información, conforme a la modificación propuesta del artículo 11°; y en el caso de las modificaciones normativas propuestas del artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y del artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que los Alcaldes, Regidores, Gobernador Regional y Consejeros serán suspendidos por el término de sesenta (60) días naturales, por no entregar u omitir la información solicitada o no dar respuesta en los plazos de ley.

Al respecto se señala que habiéndose pedido opinión a diversas entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, no se ha recibido respuesta en esta Comisión.

Sobre la propuesta planteada de que se modifiquen los artículos 4, 8 y 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como se modifiquen el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 31 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; la Comisión estima que en los términos planteados no es viable, por cuanto las modificaciones propuestas deberían estar orientadas a la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y no de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; puesto que los derechos fundamentales son diferentes a las facultades que la Ley reconoce a las autoridades y las sanciones por su incumplimiento.

5.6 Análisis del Proyecto de Ley 5429/2023-CR que plantea modificar los artículos 3 y 7 de la Ley 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como incorporar el artículo 9 a la Ley 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar los artículos 3 y7 de la Ley 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como incorporar el artículo 9 a la Ley 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública en forma diferenciada por parte de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios, para ello se modifica la Ley 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura concluye que la propuesta normativa resulta viable, planteando sugerencias en la redacción del artículo 2 del mismo.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social concluye que el proyecto de ley 5429/2022-CR, "Proyecto de Ley que garantiza el acceso a la información de pueblos indígenas u originarios", no contempla asuntos de competencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ya que contiene aspectos que son competencia del Ministerio de Cultura.

Sobre la propuesta planteada de que se modifiquen los artículos 3 y 7 de la Ley N.° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como incorporar el artículo 9 a la Ley N° 26889 - Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa; la Comisión recoge el objetivo de la iniciativa de ley en la propuesta de modificación del artículo 3 del texto sustitutorio del presente dictamen, disponiendo la entrega de información pública en la lengua originaria del solicitante, además del idioma castellano, con lo cual se cubre el vacío legal existente.

5.7 Análisis del Proyecto de Ley 5602/2022-CR que plantea modificar el artículo 4° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 4 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de fortalecer la transparencia y acceso a la información pública por la ciudadanía para combatir la corrupción y fomentar un gobierno de datos abiertos; estableciendo que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere la indicada Ley; estarán bajo los alcances del Decreto Legislativo 1194, Decreto Legislativo que Regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia; y, que la obligación de denunciar, bajo sanción administrativa grave y denuncia penal por la comisión de delito de Omisión de Denuncia a que hace referencia el Artículo 407 del Código Penal, recae en la segunda instancia administrativa en el supuesto de cosa decidida o la instancia judicial respectiva en el cual se adquirió la condición de cosa juzgada. En ambos casos, debe demostrarse el incumplimiento de la ley.

La Defensoría del Pueblo señala que, considera que la propuesta legislativa debería estar dirigida a empoderar al Tribunal de Transparencia a fin que pueda contar con mecanismos de seguimiento y exigencia en el cumplimiento de sus resoluciones, en vez de atribuir funciones de denuncia al órgano judicial o administrativo. De la misma forma indica que se debe dotar de facultad sancionadora al Tribunal cuando advierta el incumplimiento de la normativa sobre la materia. Por otra parte, resalta que en la exposición de motivos del proyecto de ley no han observado mayor sustento que justifique fortalecer los mecanismos de penalización ante el incumplimiento del marco normativo de transparencia y acceso a la información pública, o de dar aviso o denunciar su incumplimiento por parte de los órganos garantes, ni para que los casos sean tramitados por proceso inmediato. Es decir, consideran que no se ha realizado un estudio o presentados hallazgos de cómo los mecanismos propuestos podrían privilegiar el ejercicio del derecho a saber de las y los administrados; considerando que la propuesta legislativa debería reorientarse a fortalecer los mecanismos y órganos existentes para

garantizar de una mejor manera el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, indica que requiere de una mayor motivación, a fin de poder evaluar su efectiva incorporación en nuestro ordenamiento jurídico.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el artículo 4 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de fortalecer la transparencia y acceso a la información pública por la ciudadanía para combatir la corrupción y fomentar un gobierno de datos abiertos; estableciendo que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere la indicada Ley; estarán bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1194, Decreto Legislativo que Regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia; y, que la obligación de denunciar, bajo sanción administrativa grave y denuncia penal por la comisión de delito de Omisión de Denuncia a que hace referencia el Artículo 407 del Código Penal, recae en la segunda instancia administrativa en el supuesto de cosa decidida o la instancia judicial respectiva en el cual se adquirió la condición de cosa juzgada; la Comisión estima que en los términos planteados no resulta viable, por cuanto la propuesta legislativa debería estar dirigida a empoderar al Tribunal de Transparencia a fin que pueda contar con mecanismos de seguimiento y exigencia en el cumplimiento de sus resoluciones, en vez de atribuir funciones de denuncia al órgano judicial o administrativo; y, asimismo la denuncia que se pueda interponer por el delito de abuso de autoridad, generalmente no es en flagrancia y requiere de una etapa probatoria que no tiene el proceso inmediato; que es de naturaleza sumarísima y está hecho para combatir otros tipos de delitos.

5.8 Análisis del Proyecto de Ley 5697/2023-CR que plantea modificar el artículo 5° y 39° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 5 y 39 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de contribuir a través de las herramientas de transparencia y acceso a la información pública, con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad de los funcionarios y servidores públicos del Estado, facilitando la verificación y control social de la información contenida en los Portales de Transparencia Estándar del Estado Peruano; modificando el numeral 5 del artículo 5 de la referida Ley señalando que las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la información sobre funcionarios y servidores obligados a presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, de acuerdo a la legislación sobre la materia según corresponda, incluyendo declaración jurada de intereses, hoja de vida y acceso al texto de las tesis y/o trabajos de investigación con los

que optaron los grados académicos de Maestro o Doctor; e igualmente modificando el artículo 39° añadiéndose en su numeral 1 que las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, la información básica sobre su formación académica y experiencia laboral, acceso al texto de las tesis o trabajos de investigación con los que optaron los grados académicos de Maestro y/o Doctor, sanciones disciplinarias impuestas, patrimonio conforme a su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, sentencias, resoluciones o dictámenes emitidos o en las que haya participado como integrante de un colegiado.

Al respecto, el constitucionalista y miembro consultivo de la Comisión Enrique GHERSI es de opinión desfavorable para que se apruebe la presente propuesta normativa, por cuanto, entre otras razones, señala que es falso que en nuestro sistema jurídico el texto completo de todas las tesis y/o trabajos de investigación que conducen a la obtención de grados y títulos académicos tenga que ser público en todos los casos; por el contrario, señala que de acuerdo a la normativa vigente, si bien es obligatorio para las universidades registrar dichos trabajos en el RENATI, éstas pueden decidir si publican el texto completo de la investigación o sólo un resumen de la misma; existiendo inclusive un Reglamento aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo 033-SUNEDU/CD que señala que el registro es obligatorio a partir del 10 de Julio de 2014; y, asimismo la decisión de destituir a un alto funcionario del Estado requiere realizar una evaluación respecto de la falta presuntamente cometida, a efectos de determinar si existe una justificación válida para imponer una sanción; añadiendo que sin embargo el Proyecto de Ley propone la destitución *ipso iure* de funcionarios públicos los cual resulta lesivo del derecho fundamental al debido proceso y, por lo tanto inconstitucional.

La Defensoría del Pueblo señala que respecto a la modificación del artículo 5, así como la modificación del artículo 39 de la ley referida al acceso al texto de la tesis y/o trabajos de investigación con los que los funcionarios y servidores optaron los grados académicos de Maestro o Doctor, es recomendable que se pueda evaluar la posibilidad de establecer- en la respectiva norma específica- la obligatoriedad del registro virtual de los trabajos de investigación desarrollados antes de la implementación del RENATI, además de un plazo para el respectivo registro, a fin de extender los alcances de dicha plataforma digital, en línea con las disposiciones vigentes sobre la materia; y, asimismo, respecto a la prohibición de nombramiento y designación (artículo 3 de la propuesta legal), se recomienda su reevaluación, en la medida que previo a la evaluación de una propuesta de dicha naturaleza, se requiere que la normativa específica establezca la obligación del registro de las tesis o trabajos de investigación desarrollados antes de la implementación de la citada plataforma.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a través de su Presidente Werner Máximo Salcedo Álvarez señala que la propuesta legislativa contraviene la Ley de protección de datos personales regulados en la Ley 29733 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, respecto de la reserva datos que al ser conocimiento público puede ser usados de manera ilegal; que el proyecto de Ley pretende que la ciudadanía tenga acceso al "texto de las tesis y/o trabajos de investigación con los que optaron los grados académicos de Maestro o Doctor" de los funcionarios; al respecto ya se encuentra registradas en RENATI y publicadas en el portal de cada Universidad, por lo que sería innecesario regular al respecto; y, asimismo que el proyecto de Ley pretende limitar la contratación de un profesional cuando no existe tesis de investigación maestría o Doctorado; con dicha condición afectaría el derecho fundamental del acceso al derecho de trabajo reconocido en el artículo 22 y siguientes de la constitución política del Estado.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el numeral 5 del artículo 5° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señalando que las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la información sobre funcionarios y servidores obligados a presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, de acuerdo a la legislación sobre la materia según corresponda, incluyendo declaración jurada de intereses, hoja de vida y acceso al texto de las tesis y/o trabajos de investigación con los que optaron los grados académicos de Maestro o Doctor; e igualmente modificando el artículo 39° añadiéndose en su numeral 1 que las entidades que forman parte del sistema de justicia están obligadas a publicar en sus respectivos portales de transparencia, la información básica sobre su formación académica y experiencia laboral, acceso al texto de las tesis o trabajos de investigación con los que optaron los grados académicos de Maestro y/o Doctor, sanciones disciplinarias impuestas, patrimonio conforme a su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, sentencias, resoluciones o dictámenes emitidos o en las que haya participado como integrante de un colegiado; y, asimismo, en su Disposición Complementaria Final se señala que para el caso de los profesionales con grado académico de Maestro o Doctor obtenidos en fecha previa a la aprobación del Reglamento del RENATI de la SUNEDU, las respectivas tesis o trabajos de investigación aprobadas dentro del marco de la Ley 27705, deberán registrarse en el RENATI de la SUNEDU y ser accesibles a través de los repositorios de esta entidad y de las universidades que confirieron el grado, dentro de los 150 días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ley; siendo la SUNEDU responsable del cumplimiento de esta obligación en ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción. Se añade que vencido el plazo indicado, las respectivas tesis o trabajos de

investigación para optar los grados académicos de Maestro y/o Doctor deberán ser accesibles a través del RENATI de la SUNEDU, caso contrario, la norma o resolución de nombramiento o designación, o que encarga funciones, queda sin efecto y el funcionario o servidor involucrado impedido de seguir ejerciendo el cargo bajo responsabilidad funcional; la Comisión estima que en los términos planteados no es viable, por cuanto de acuerdo a la normativa vigente, si bien es obligatorio para las universidades registrar dichos trabajos en el RENATI, éstas pueden decidir si publican el texto completo de la investigación o sólo un resumen de la misma; existiendo inclusive un Reglamento aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo 033-SUNEDU/CD que señala que el registro es obligatorio a partir del 10 de Julio de 2014; que previamente se tendría que modificar la respectiva norma específica, sobre la obligatoriedad del registro virtual de los trabajos de investigación desarrollados antes de la implementación del RENATI, además de un plazo para el respectivo registro, a fin de extender los alcances de dicha plataforma digital, en línea con las disposiciones vigentes sobre la materia; y, asimismo la decisión de destituir a un alto funcionario del Estado requiere realizar una evaluación respecto de la falta presuntamente cometida, a efectos de determinar si existe una justificación válida para imponer una sanción; añadiendo que sin embargo el Proyecto de Ley propone la destitución *ipso iure* de funcionarios públicos los cual resulta evidentemente contravienen los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al proyecto de vida; resultando por lo tanto inconstitucional esta propuesta legislativa en ese extremo.

5.9 Análisis del Proyecto de Ley 6002/2023-CR que plantea modificar el artículo 12 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 12 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología; dándose las facilidades para que los ciudadanos directamente registren digitalmente a través de sus equipos celulares los documentos requeridos y sin ningún costo para ellos. También se autoriza el uso de links de carga y descarga, USB, envío por correo electrónico o mensajería digital, o cualquier otra herramienta tecnológica; sin costo para el ciudadano. Siempre se debe dejar constancia en un acta o documento a fin sobre la entrega directa de la información, en la cual debe firmar el ciudadano y la persona encargada de entregar dicha información.

La Defensoría del Pueblo señala que la propuesta no toma en cuenta la existencia de un régimen de excepciones (información secreta, reservada o confidencial) que también se debe aplicar al acceso directo. Por tanto, el desarrollo del ejercicio de derecho de acceso

a la información de forma directa y la toma de imágenes, debería tener en consideración el eventual tratamiento de información clasificada y la orientación que debe realizar el FRAI de cada entidad, de tal forma que no restrinja el ejercicio del derecho a saber de las y los administrados.

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia señala que el Proyecto de Ley no debe desnaturalizar la figura del "acceso directo" o sustituir al "procedimiento de acceso" regulado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por cuanto, cada modalidad de acceso responde a una finalidad diferente. Así, por "acceso directo" no puede obtenerse información que requiera de un análisis previo de su naturaleza pública o exigir una reproducción inmediata de la información. No obstante, a juicio de esta Autoridad, si la entrega de información (más allá del simple registro visual, manual o digital) no demanda esfuerzo adicional para la entidad y, por el contrario, es más célere que atenderlo por un procedimiento de acceso, resulta viable que en el marco del mismo "acceso directo" también se brinde información a través de links, USB, correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea.

La Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que si bien la iniciativa busca dar facilidades para el acceso a la información pública, debe tenerse presente las excepciones al ejercicio del derecho, las cuales se encuentran recogidas en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, aprobado por Decretos Supremo Nº 021-2019-JUS, referida a la información secreta, reservada y/o confidencial. Asimismo, se debe considerar que actualmente se vienen utilizando herramientas tecnológicas en aras de garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, sin que ello genere gastos al erario público.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el artículo 12 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología; la Comisión estima que en los términos planteados no es viable, por cuanto la propuesta no toma en cuenta la existencia de un régimen de excepciones y por lo tanto la existencia de información secreta, reservada o confidencial en las entidades de la administración pública, en especial las que manejan información sensible, que puede afectar inclusive a la defensa nacional que también se debe aplicar al acceso directo. Por tanto, el desarrollo del ejercicio de derecho de acceso a la información de forma directa y la toma de imágenes, debería tener en consideración el eventual tratamiento de

información clasificada y la orientación que debe realizar cada entidad, de tal forma que no restrinja el ejercicio del derecho a saber de las y los administrados.

5.10 Análisis del Proyecto de Ley N° 06011/2023-CR que plantea modificar el Artículo 7° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objeto de la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de las solicitudes verbales; añadiendo un segundo párrafo a su artículo 7° señalando que cuando la solicitud sea verbal, la entidad debe registrar inmediatamente dicha solicitud y entregarle cargo de recepción al ciudadano. Dicho proceso, se indica, estará a cargo de las mesas de partes físicas.

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia señala que en la medida que se plantea modificar el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la legitimación y carácter inmotivado del derecho de acceso, quebraría la sistematicidad del articulado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En todo caso, la propuesta debería modificar el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública referido al procedimiento, por cuanto, se trata de una forma más de la presentación de una solicitud de acceso a la información.

La Defensoría del Pueblo señala que en cuanto al extremo que regula el procedimiento para tramitar solicitudes presentadas de forma verbal, lo consideran positivo ya que permitirá llevar un registro real de estas solicitudes y brindarles el trámite correspondiente, garantizando el derecho a saber de la ciudadanía. Sin embargo, añade que se debe capacitar a las personas encargadas de la recepción y registro de las solicitudes; lo cual no ha considerado que tendría un costo, que tendría que hacerse a nivel nacional. No obstante, indica que en la medida que se plantea modificar el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la legitimación y carácter inmotivado del derecho de acceso, quebraría la sistematicidad del articulado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En todo caso, la propuesta debería modificar el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública referido al procedimiento, por cuanto, se trata de una forma más de la presentación de una solicitud de acceso a la información.

Sobre la propuesta planteada de que se pueda solicitar verbalmente el pedido de acceso a la información pública en las diferentes entidades públicas; la Comisión estima que no

es viable, por cuanto implicaría que los servidores públicos que laboran en las Mesas de Partes de las entidades públicas además de cumplir con su labor de recibir las solicitudes que por escrito se les presenten; tengan que saber formular debidamente actas de pedidos o solicitudes verbales de información; y, asimismo que tengan en sus oficinas un sistema de grabación de audio y video, donde se pueda perennizar los pedidos; todo lo cual además de generar un elevado costo conllevaría riesgos para el efectivo registro de los pedidos ciudadanos; pues en la actualidad no se cuenta en las mesas de partes de todos los ministerios e instituciones públicas con personal capacitado en la formulación de actas ni tampoco existen cámaras y sistemas de grabación de audio y video, que tengan que usarse cuando un ciudadano solicite verbalmente cualquier información.

5.11 Análisis del Proyecto de Ley 6013/2023-CR que plantea modificar el artículo 13 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 13 de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología; añadiéndose que si el ciudadano requiere que la información pública sea remitida de manera virtual al domicilio electrónico señalado en su escrito de solicitud, es obligatorio que la entidad pública cumpla la forma solicitada de envío, en caso contrario se considera denegado el pedido.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la propuesta legislativa tiene por objetivo modificar el artículo 13 de la Ley 27806, a fin de establecer expresamente que cuando la persona requiera información pública en formato virtual, la entidad obligada deberá cumplir con remitirla en dicho formato al domicilio electrónico que haya consignado en su solicitud, caso contrario, se considerará denegado el pedido. Sobre el particular, el artículo 10 de la ley 27806 establece la obligación de las entidades de la administración pública de proveer la información requerida, siempre que esté contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro formato, y siempre que haya sido creada u obtenida por la entidad o que se encuentre en su posesión o control. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que omitir entregar información pública en el formato solicitado tiene repercusión en el ejercicio del derecho a saber del solicitante. Añade que en el mismo sentido, el Tribunal de Transparencia ha ordenado la entrega de información solicitada en el formato requerido por el solicitante (virtual), a fin de satisfacer plenamente su derecho de acceso a la información pública; y, que en atención a lo expuesto, consideran que la regulación propuesta no constituye un cambio necesario en la Ley 27806, ya que de la norma vigente

y de las interpretaciones hechas por los órganos garantes se colige que parte del derecho de acceso a la información pública es recibir la información en el formato requerido.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica señala que, si bien la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece las formalidades a seguirse cuando se entregue la información de manera virtual, al domicilio electrónico, de manera supletoria, se aplica lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el cual prevé que, en el supuesto de notificación electrónica, en caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1 del TUO de la LPAG.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el artículo 13° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano a través de la tecnología; añadiéndose que si el ciudadano requiere que la información pública sea remitida de manera virtual al domicilio electrónico señalado en su escrito de solicitud, es obligatorio que la entidad pública cumpla la forma solicitada de envío, en caso contrario se considera denegado el pedido; la Comisión estima que no es viable, por cuanto ya se encuentra debidamente legislado y establecido el procedimiento para el envío virtual de la información en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

5.12 Análisis del Proyecto de Ley 6041/2023-CR que plantea modificar el artículo 10 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objeto de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano sin la firma de abogado en la apelación administrativa.

La Defensoría del Pueblo señala que no ha conocido problemática alguna por la exigencia de firma de abogado/a para la presentación de recursos de apelación ante el Tribunal de Transparencia. En ese sentido, no observan que la iniciativa legislativa presente algún estudio o hallazgo que sustente la necesidad del cambio, por ejemplo, algún caso en el que se haya restringido el derecho por dicho motivo o alguna problemática en la normativa vigente. Resaltan que la exigencia de firma de abogado/a sí se presenta como problema

en el ámbito judicial, es decir, para la presentación del proceso constitucional de habeas data. Al respecto, el Nuevo Código Procesal Constitucional incluyó la obligación de este requisito procesal, a diferencia del artículo 65 del derogado Código Procesal Constitucional, el cual disponía que no era obligatorio el patrocinio de un abogado para impulsar el referido proceso judicial. Indica que no se ha realizado un análisis detallado de cada una de las modificaciones propuestas de la Ley 27806 ni una justificación motivada para las mismas, lo que exige la técnica legislativa. Consideran que requieren un mayor sustento, a fin de poder evaluar su efectiva incorporación en nuestro ordenamiento jurídico.

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que es de la opinión que no existe un problema público que tenga que ser atendido; por lo que, resultaría siendo inoficiosa. Sin embargo, no ven inconveniente que el criterio adoptado vía interpretación normativa, sea positivizado en una Ley formal expedida por el Congreso de la República, máxime si su aprobación optimizaría el principio de informalismo y simplicidad, reduciendo de esa manera los costos a la ciudadanía. Consideran que el "Proyecto de Ley 6041/2023-CR, Ley que precisa la no firma de abogado para la apelación administrativa en la solicitud de información pública", resulta viable, con observaciones.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el literal e) del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objeto de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano sin la firma de abogado en la apelación administrativa; la Comisión estima que no es viable, por cuanto la norma vigente en materia de transparencia y acceso a la información no señala como obligación para presentar un recurso de apelación que los recursos de apelación tenga que tener obligatoriamente firma de abogado para que puedan ser admitidos. Es de señalar que el marco normativo vigente en materia de transparencia y acceso a la información no regula los requisitos que deben observar los recursos de apelación; no obstante, en aplicación de la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en todo lo no previsto por la norma especial será de aplicación lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Así las cosas, el artículo 221 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que "el escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124"; y el referido artículo no establece como requisito obligatorio, la firma de abogado para su presentación. Es decir, la firma de abogado en los escritos de apelación es una decisión del administrado y no una exigencia para su

presentación. No se mencionan tampoco en la propuesta normativa casos en los cuales se haya exigido la firma de abogado en la administración pública para la presentación y admisión de un recurso de apelación.

5.13 Análisis del Proyecto de Ley 6156/2023-CR que plantea modificar el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora, bien, como se ha señalado previamente la finalidad del proyecto de ley materia de análisis es la de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública al ciudadano sin que sea exigible la firma de abogado.

Origen y necesidad de la reforma

Conforme se señaló en los párrafos precedentes el dos de agosto del año dos mil dos se emitió la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y debido a las modificaciones que tuvo durante su vigencia, posteriormente mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM del veintidós de abril del año dos mil tres se aprobó su Texto Único Ordenado; norma legal que conforme a su artículo 1.- Alcance de la Ley, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; y, en su artículo 3.- Principio de Publicidad, señala claramente que todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en esa Ley están sometidas al principio de publicidad; así como en su artículo 8.- Entidades obligadas a informar, señala que as entidades públicas están obligadas a brindar información; y, en su artículo 10.- Información de acceso público, indica que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, se señala que, para los efectos de esa Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

El Acceso a la Información Pública para la Consolidación de la Democracia y la Gobernabilidad Democrática según el Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el texto denominado "El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos" de mayo del 2013 señala que el acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Asimismo, es importante porque permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado transparentando la gestión pública.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las políticas públicas.

En la región, indica, la necesidad de abogar por instituciones transparentes y permeables a las solicitudes de información de los ciudadanos impulsó demandas que se englobaron bajo la denominación de "el derecho a saber" o "romper con la cultura del secreto". Ambas sirvieron para impulsar reformas en las administraciones públicas que modificaron legislaciones, prácticas y estructuras para garantizar el derecho de cada ciudadano a recibir la información solicitada. En ese marco, se produce la aprobación de 21 leyes de acceso a la información y transparencia en los últimos años en la región.

Muchos de estos países han avanzado de manera considerable en la implementación de sus leyes, como así también en la construcción de estructuras institucionales encargadas de garantizar la protección de este derecho. La creación de Institutos de Acceso a la Información y órganos garantes en muchos países de la región condujo a la generación de conocimiento, jurisprudencia y personal capacitado para ejercer esas funciones encomendadas.

Este mismo proceso llamado por varios autores "maduración" de las políticas de derecho de acceso a la información que permitieron la transformación de políticas generales y amplias en relación al uso y a la apertura de información hacia políticas específicas, focalizadas y dirigidas a un público en concreto, dándole un valor instrumental a este derecho.

El acceso a la Información como derecho y como política pública se encuentra íntimamente ligado a las ideas de democracia y gobernabilidad democrática.

En efecto, si comprendemos que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, estamos estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su "ciudadanía" sustento básico de la democracia.

Si bien el derecho de acceso a la información pública tiene una connotación modernista en términos teóricos su concepción siempre estuvo subsumida en la propia formación del Estado democrático. Precisamente, este modelo se diferencia de los modelos absolutistas -entre otras cosas- por el respeto de las libertades humanas y el principio del interés general del Estado.

Es bajo el enfoque liberal del principio del interés general del Estado que el derecho al acceso a la información pública cobra especial relevancia, debido a que no es concebible un Estado en el que existan "secretos" o informaciones privilegiadas porque esto significaría que se actúa en función de algún "interés particular" desnaturalizando la propia concepción de la democracia.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Perú

De forma general, el derecho de acceso a la información pública es reconocido como una facultad que permite a los ciudadanos contar con datos que obran en las entidades públicas; sin embargo, se puede señalar en que su proyección lo sitúa como un verdadero condicionante para otros derechos, tales como el ejercicio de la democracia participativa y el derecho a la libertad de expresión. Ello es así porque únicamente de contar con acceso a determinados datos es posible formarse una adecuada convicción de los acontecimientos y ejercer así una efectiva opinión pública libre, que garantice en último término la democracia

El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a solicitar aquella información pública o de interés general que obre en bancos de datos de entidades públicas y que se le permita acceder a ella únicamente de asumir el costo que su reproducción pueda acarrear. Además, la eventual negación de los funcionarios de las entidades públicas de proporcionar dicha información solo podría basarse en razones expresa y claramente establecidas en la normativa que regula este derecho, y sobre la base de motivos legítimos como intimidad personal, seguridad nacional u otros criterios que vayan en la misma línea. De acuerdo con lo señalado, este derecho no cuenta con elementos de discrecionalidad para que se habilite su ejercicio (a diferencia del derecho de petición comprendido en sentido estricto), no faculta a la divulgación de información

veraz (como en el derecho a la libertad de información) o de expresiones subjetivas (como en el derecho a la libertad de expresión), o a que se acceda a una base de datos sobre información sobre uno mismo.

La Constitución Política del Perú de 1993 ha incorporado dentro del catálogo de derechos que reconoce al derecho de acceso a la información pública, lo cual ha quedado reflejado en su artículo 2°, inciso 5:

> "Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional [...]".

Del análisis del glosado precepto constitucional es posible colegir que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se vincula directamente con los siguientes elementos:

- Las personas (naturales y jurídicas, al no formularse distinciones en el artículo constitucional) se encuentran facultadas para solicitar información y recibirla.
- El sujeto pasivo de dicha solicitud es toda entidad pública.
- La información debe ser remitida dentro del plazo que establezca la normativa legal pertinente.
- El solicitante debe asumir el costo que genere el satisfacer su pedido de información. • Se trata –al igual que ocurre con todos los derechos fundamentales- de un derecho que tiene límites.
- Dichos límites serían impuestos por el derecho a la intimidad de personas ajenas a los solicitantes de la información, por motivos de seguridad nacional y finalmente se habilita a que la ley pueda estipular otros temas exentos del acceso público.

Es también importante señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública en los siguientes términos:

> "[...] La Constitución Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, [...] no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación de proveer la información solicitada. Pero es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de la razón por la que se solicita la información, este carácter descarta la necesidad de justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o en la existencia de un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente inconstitucional [...]" [22]

Aun cuando existieron algunos intentos previos de establecer una normativa que permita a los ciudadanos el acceso a la información que se encuentre en poder de las entidades públicas, es únicamente con la entrada en vigor de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se produjo una regulación general, aplicable a todos los organismos públicos. El objetivo fue promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (artículo 1).

Dicho texto normativo fue cuestionado por generar excesivas restricciones al ejercicio de este derecho. Para superar estos cuestionamientos (que planteaban que algunos de sus apartados fueran declarados contrarios a la Constitución), mediante la Ley 27927, el Congreso efectúa la modificación respectiva e incorpora algunos artículos en el referido dispositivo legal.

El texto que hoy se encuentra vigente es el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, el cual ya ha sido a su vez objeto de algunas modificaciones. Ahora bien, es preciso indicar que este texto normativo no ha incorporado artículo específico que desarrolle el contenido que tendría este derecho; sin embargo, sí ingresa a determinar los sujetos legitimados para ejercerlo, las entidades obligadas a permitir el acceso a su información, los límites válidos a su ejercicio (a través de las categorías de información secreta, reservada y confidencial).

---

[22] STC del expediente 950-2000-HD/TC, FJ 5.

Sin embargo, existe un vacío legal en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto no se señala si para solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública es exigible o no que el pedido sea suscrito por un abogado; lo cual puede originar que cuando la entidad pública no quiera proporcionar la información pedida, simplemente declare improcedente el pedido por no contar con la firma de abogado; siendo necesario por ello, con el fin de que no se limite este derecho, que se establezca claramente en la normativa vigente que no será necesaria ni exigible la firma de abogado; motivo por el cual la Comisión estima que es viable, la propuesta normativa.

5.14 Análisis del Proyecto de Ley 6157/2023-CR que plantea modificar el artículo 17 a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 17 a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública precisando su gratuidad cuando se solicita su entrega de forma virtual.

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que la gratuidad de la entrega de información en formato digital (correo electrónico) es regulada por la Constitución Política del Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y el Decreto Supremo 164-2020-PCM. Incluso los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública en sede administrativa como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también lo regulan. Indican que el término apropiado para referirse a la entrega de la información a través de correos electrónicos es formato digital y no virtual; Señalan que consideran que el "Proyecto de Ley N° 6157/2023-CR, Ley que precisa la gratuidad de la información pública cuando se solicita su remisión de forma virtual", resulta no viable.

Sobre la propuesta planteada de que se pueda modificar el artículo 17 a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad de facilitar la transparencia y acceso directo a la información pública precisando su gratuidad cuando se solicita su entrega de forma virtual; la Comisión estima que no es viable, por cuanto la entrega de información de manea virtual ya se encuentra legislada y es gratuita.

5.15 Análisis del Proyecto de Ley 6405/2023-CR que plantea modificar el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública para los pueblos indígenas u originarios.

La Defensoría del Pueblo considera que la propuesta legislativa resulta viable con observaciones, ya que el proyecto contiene una propuesta positiva en tanto podría permitir garantizar el ejercicio del derecho a saber de las y los ciudadanos de grupos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas u originarios. Ello, se condice con la pluriculturalidad que define la naturaleza del Estado peruano y que se reconoce en diversas disposiciones del texto constitucional.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura, considera igualmente que el Proyecto de Ley es considerado viable con recomendaciones.

Sobre la propuesta planteada de que se pueda modificar el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública para los pueblos indígenas u originarios; la Comisión estima su viabilidad, acogiendo el objetivo de la iniciativa de ley en la propuesta de modificación del artículo 3 del texto sustitutorio del presente dictamen, considerando la entrega de información pública en la lengua originaria del solicitante, además del idioma castellano, con lo cual se solucionaría el vacío legal existente.

5.16 Análisis del Proyecto de Ley 6483/2023-CR que plantea modificar el artículo 10 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 10 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objeto de fortalecer la transparencia y acceso a la información pública de las carpetas fiscales y expedientes judiciales en etapa de juicio oral; añadiendo dos párrafos a su artículo 10 señalando que cuando una de las partes procesales es una entidad pública, la totalidad de las carpetas fiscales que se encuentran en el Ministerio Público, así como la totalidad de los expedientes judiciales que se encuentra en el Poder Judicial, son información pública y por tanto de acceso público cuando se encuentran en etapa de juicio oral. Añade que en los delitos contra la administración pública, no se aplica ninguna de las excepciones establecidas en la presente ley y el derecho a la intimidad se encuentra restringido.

La Presidencia del Consejo de Ministros se ha inhibido de emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 6483/2023-CR señalando que contiene materias que se encuentran

dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecida en la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; motivo por el cual indica que mediante el Oficio N° D003226-2024-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros ha remitido al referido ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, precisando que la opinión que para tal efecto emita, sea remitida directamente a la esta Comisión; la cual no se ha recibido hasta el momento.

Sobre la propuesta planteada de que se añadan dos párrafos al artículo 10° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública indicándose que cuando una de las partes procesales es una entidad pública, la totalidad de las carpetas fiscales que se encuentran en el Ministerio Público, así como la totalidad de los expedientes judiciales que se encuentra en el Poder Judicial, son información pública y por tanto de acceso público cuando se encuentran en etapa de juicio oral; y, que en los delitos contra la administración pública, no se debe aplicarse ninguna de las excepciones establecidas la referida Ley y el derecho a la intimidad se encuentra restringido; la Comisión estima que en los términos planteados no resulta viable, por cuanto lo que se tendría que modificar para que ello sea posible es el Código Procesal Penal, que es la norma penal adjetiva que establece todos los procedimientos para investigar, procesar y sentenciar a una persona natural o a una persona jurídica; y, establece igualmente los mecanismos legales que se tendrían que seguir para obtener las informaciones que se encuentren dentro de una carpeta fiscal; y, quienes son competentes legalmente para solicitarlo. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no tiene absolutamente nada que ver con la información y medios probatorios que obren en una Carpeta Fiscal, que es parte de un Expediente Judicial, que se encuentra en la etapa de Juzgamiento; en el cual inclusive hasta que no se dicte sentencia y esta sea firme, existe la presunción de inocencia de los investigados o acusados.

5.17 Análisis del Proyecto de Ley 6484/2023-CR que plantea modificar el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la con la finalidad de precisar el valor comercial de la reproducción de la información pública para fomentar la transparencia.

Con respecto a esta propuesta normativa se han pedido opinión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ANTAIP; no habiéndose recibido hasta el momento respuesta de lo solicitado.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la con la finalidad de precisar el valor comercial de la reproducción de la información pública para fomentar la transparencia; señalándose que el solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos comerciales de reproducción de la información requerida. El monto comercial de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes; la Comisión estima que no es viable, por cuanto ya se encuentra normado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública los costos de reproducción de la información que se solicite.

5.18 Análisis del Proyecto de Ley 6631/2023-CR que plantea modificar la letra "g" del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar la letra "g" del artículo del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la con la finalidad del plazo adicional para la entrega de información.

La Defensoría del Pueblo considera que la propuesta legislativa no resultaría viable para su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, sugiere su reevaluación y la incorporación o desarrollo de aportes brindados por la Defensoría del Pueblo; señalando que cualquier modificación sobre el uso de un plazo de prorroga debe tener en cuenta que la naturaleza y cantidad de la información que se solicita no siempre es la misma, es decir habrán casos en que el plazo adicional de 7 días hábiles podría no resultar suficiente debido a las características especiales de la información requerida. De ahí indica, la importancia de contar con un mayor sustento y análisis para que dicho extremo de la modificatoria resulte viable. Aunado a ello, la Defensoría del Pueblo considera que solicitar autorización para el uso de un plazo de prórroga ante el Tribunal de Transparencia solo adiciona días al procedimiento de acceso a la información pública, lo convierte en engorroso y genera mayor carga a la labor de dicho órgano garante. En la actualidad, y de acuerdo a la última Memoria Anual del Tribunal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, solo durante el año 2022, dicho órgano recibió más de 3000 recursos de apelación, por lo que no sería viable añadirle una función adicional.

Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que el "Proyecto de Ley N° 6631/2023-CR, Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública con relación al plazo adicional para la entrega de información", no resulta viable. Indica que la regulación de un plazo determinado de prórroga, si bien en apariencia favorece al administrado, puede afectar sustancialmente la continuidad del servicio o la función pública, porque sin importar la complejidad de la causa para hacer uso de la prórroga, las entidades deberán entregar la información en un plazo indefectible de siete (07) días hábiles. Además, expone irrazonablemente a eventuales responsabilidades. El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública carece de "función autorizatoria", por ello, resultaría incoherente proponer que las entidades obligatoriamente le soliciten autorización para utilizar el plazo máximo de prórroga de siete (07) días adicionales y también que, en un plazo máximo de tres días hábiles, deba responder al pedido de autorización. Si bien, dicha función puede incorporarse en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, ello supondría desnaturalizar la razón de ser del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es resolver controversias.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique la letra "g" del artículo del artículo 11 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; estableciendo que por única vez la entidad puede entregar la información en un plazo máximo de siete días hábiles adicionales, para lo cual debe solicitar autorización al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo de cinco días hábiles de recibida la solicitud de información; la Comisión estima que no es viable, por cuanto cualquier modificación sobre el uso de un plazo de prórroga debe tener en cuenta que la naturaleza y cantidad de la información que se solicita no siempre es la misma, es decir habrán casos en que el plazo adicional de 7 días hábiles podría no resultar suficiente debido a las características especiales de la información requerida; por cuanto, según lo propuesto sin importar la complejidad de la causa para hacer uso de la prórroga, las entidades deberán entregar la información en un plazo indefectible de siete (07) días hábiles. Además, expone irrazonablemente a eventuales responsabilidades; y, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no tiene función autoritativa.

5.19 Análisis del Proyecto de Ley 7077/2023-CR que plantea incorporar el literal g) del numeral 1 al artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca incorporar el literal g) del numeral 1 al artículo 16 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, con la finalidad de incorporar a la información que forma parte de la etapa de investigación preparatoria realizada por el Ministerio Público, y sus órganos de apoyo, dentro de la información clasificada como reservada; porque señala que difundir la información que forma parte de las mismas puede traer como consecuencia la posibilidad de atentar contra el honor, la intimidad, la seguridad o la vida de los sujetos procesales, así como poner el riesgo los fines, objetivos y éxito de dichas investigaciones o que se perturbe el debido esclarecimiento de los hechos.

La Defensoría del Pueblo ha opinado que la información generada en la investigación preparatoria, regulada en el artículo 324 del Nuevo Código Procesal Penal, corresponde a la clasificación de información confidencial por lo que ya se encuentra incluida dentro de las excepciones legales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, consideran que la iniciativa legislativa propuesta no resultaría necesaria.

Sobre la propuesta planteada de que se incorpore el literal g) del numeral 1 al artículo 16 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, con la finalidad de incorporar a la información que forma parte de la etapa de investigación preparatoria realizada por el Ministerio Público, y sus órganos de apoyo, dentro de la información clasificada como reservada; la Comisión estima que no es viable, por cuanto lo que se pretende legislar ya se encuentra normado en el artículo 324 del Código Procesal Penal que señala que la investigación tiene carácter reservado; y, que solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. y, más aún que no es conveniente que a través de una Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pretenda modificar el Código Procesal Penal.

5.20 Análisis del Proyecto de Ley 7412/2023-CR que plantea modificar el artículo 3 numeral 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de promover una cultura de información accesible a la información pública sin discriminación por razón de idioma.

La Defensoría del Pueblo, señala que la propuesta legislativa plantea modificar el artículo 3, estableciendo expresamente que la entidad está obligada a entregar la información en lengua originaria, cuando se acredite como único idioma; y, que comparten la posición establecida en la exposición de motivos respecto a que existe una urgente necesidad de políticas inclusivas que reconozcan y aborden necesidades específicas, a fin que las minorías étnicas en el Perú y en América Latina puedan enfrentar las desigualdades a las que están expuestas.

El Ministerio de Cultura señala que se advierte la viabilidad de la propuesta normativa; teniendo en cuenta que la propuesta normativa se orienta a garantizar el acceso a la información de las personas hablantes de lenguas indígenas u originarias, lo que contribuye al ejercicio del derecho al acceso a la información y conexos. En esa línea, se propone la modificación de la fórmula legal del numeral 3 del artículo 3 del proyecto de Ley materia de análisis, a fin de que se proporcione la información en la lengua indígena u originaria de las personas hablantes de estas lenguas, sin necesidad de más acreditación que su autorreconocimiento como persona hablante de lenguas indígenas u originarias, y prever los mecanismos internos que permitan realizar la atención dentro de los términos establecidos en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También se propone incorporar una disposición complementaria final orientada a que se realicen los ajustes correspondientes en el Reglamento de la Ley Nº 27806.

La Dra. Jerí Gloria Ramón Ruffner De Vega, Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha expresado su respaldo al proyecto de ley; señalando que la iniciativa propuesta busca eliminar la discriminación lingüística que enfrentan millones de personas en el Perú, especialmente aquellas de origen indígena, quienes se ven afectadas en su acceso a servicios básicos como salud, educación, trabajo y participación social debido a la exclusión de sus lenguas originarias en el ámbito público. Por tanto, considera que la modificación propuesta al artículo 3 de la Ley 27806 constituye un avance significativo en la protección de los derechos lingüísticos de nuestra población, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática.

La Escuela Profesional de Lenguas, Traducción e Interpretación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha opinado que es pertinente la propuesta de modificación de la ley; señalando que se debe tener en cuenta en la modificación que no todos los miembros de una comunidad originaria leen.

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 00889-2017-PA/TC, caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz, exhortó a las entidades públicas y privadas a implementar progresivamente servicios públicos con pertinencia lingüística en las zonas donde las lenguas indígenas u originarias son predominantes. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas indígenas u originarias en las zonas del país en donde estas predominen, en el plazo de 5 años contados desde la emisión de la sentencia, con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de los y las hablantes de lenguas indígenas u originarias.

Sobre la propuesta planteada de que se modifique el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de promover una cultura de información accesible a la información pública sin discriminación por razón de idioma; añadiendo el párrafo de que cuando la persona acredite que su único idioma es una lengua originaria, la entidad pública está en la obligación de entregar la información en dicha lengua originaria; la Comisión estima que es viable, por cuanto en el caso de que el solicitante no hable español y su único idioma sea una lengua originaria, tiene el derecho constitucional a la igualdad, a la no discriminación y de acceso a la información pública; y, por lo tanto las entidades públicas deben de estar obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a proporcionarle la información que pida en su lengua originaria.

Sin embargo, con el fin de evitar posibles distorsiones en la traducción de la lengua española a la lengua originaria; la Comisión estima que al solicitante también se le debe entregar la información pública que solicita en el lenguaje español para fines de garantizar la entrega de la información solicitada y el cotejo del contenido documentario.

5.21 Análisis del Proyecto de Ley 8066/2023-CR que plantea modificar los literales 2) y 3) del artículo 15-B y el artículo 17° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mediante la presente propuesta normativa se busca modificar los literales 2) y 3) del artículo 15-B y el artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de optimizar el principio de transparencia y máxima divulgación, restringiendo las excepciones de acceso de la información pública de manera proporcional al interés y las necesidades que las justifican en estricta correspondencia con el propósito por el cual han sido establecidas en un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, busca uniformizar los costos de reproducción de la información en todas las Entidades del Estado, sin excepción, estableciendo una tasa de reproducción real, que solo incluya los gastos en que incurra la entidad con la finalidad de darle predictibilidad, igualdad y seguridad jurídica al ciudadano.

La Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio Múltiple N° D000539-2024-PCM-SC, ha trasladado a dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

Sobre la propuesta planteada de que se modifiquen los literales 2) y 3) del artículo 15-B y el artículo 17° de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de optimizar el principio de transparencia y máxima divulgación, restringiendo las excepciones de acceso de la información pública de manera proporcional al interés y las necesidades que las justifican en estricta correspondencia con el propósito por el cual han sido establecidas en un Estado Constitucional de Derecho; la Comisión estima que no es viable, por cuanto contienen materias de carácter económico que no se encuentran dentro de las competencias del Congreso de la República.

5.22 Sobre la propuesta del texto sustitutorio

- Con respecto al texto sustitutorio de la modificación de artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se orienta a garantizar el acceso a la información de las personas hablantes de lenguas indígenas u originarias, lo que contribuye al ejercicio del derecho al acceso a la información y conexos. En esa línea, se propone la modificación de la fórmula legal del numeral 3 del artículo 3 del proyecto de Ley materia de análisis, a fin de que se proporcione la información, además del español, en la lengua indígena u originaria de las personas

hablantes de estas lenguas, sin necesidad de más acreditación que su auto reconocimiento como persona hablante de lenguas indígenas u originarias, y prever los mecanismos internos que permitan realizar la atención dentro de los términos establecidos en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Tribunal Constitucional[23] en la sentencia recaída en el Expediente N° 00889-2017-PA/TC, caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz, ha señalado que la protección de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística se encuentra consagrada en la actual Constitución en sus artículo 2, inciso 19, artículos 17, 48, 88, 89, 149 y 191, entre otros; lo que nos compele a respetarla y promoverla, toda vez que somos un país multilingüe, en el cual, según cifras dadas por el Ministerio de Cultura, se hablan 47 lenguas. En esa sentencia se indica además que los derechos lingüísticos y su relación con el accionar del Estado son abordados por la Constitución, cuando menos, desde una doble perspectiva. De un lado, se encuentra el derecho de cada miembro de una comunidad lingüística a comunicarse en su propio idioma con cualquier autoridad en cualquier lugar de la República, sea directamente, sea a través de un intérprete proporcionado por el propio Estado. Este derecho deriva del artículo 2, inciso 19, de la Constitución, en cuanto dispone que toda persona de nacionalidad peruana "tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete". Se indica en la sentencia antes referida que hablar una lengua indígena u originaria es motivo de discriminación en el Perú. Con base en prejuicios y estereotipos, existe una asociación entre su uso y una minusvaloración de la persona que busca comunicarse a través de ella. El Tribunal Constitucional a partir de este pronunciamiento considera de vital trascendencia revalorar nuestras lenguas originarias (quechua, aymara, ashaninka, etc), pues son parte fundamental de nuestra historia y cultura ancestral que hasta la fecha coexisten a través de numerosos grupos de ciudadanos en toda la República. En consecuencia, no solo resulta que cada persona tiene derecho a comunicarse en su propia lengua ante la autoridad, sino que si dicha lengua es predominante en una zona (una jurisdicción municipal provincial, por ejemplo), el Estado tiene la obligación de institucionalizar el uso de ese idioma en dicha zona, con los mismos alcances con los que ha institucionalizado el uso del idioma castellano. El Tribunal Constitucional exhorta a las entidades públicas y privadas a implementar progresivamente servicios públicos con pertinencia lingüística en las

[23] STC del expediente 00889-2017-PA/TC, FJs 5, 8, 10,21,57.

zonas donde las lenguas indígenas u originarias son predominantes. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas indígenas u originarias en las zonas del país en donde estas predominen, en el plazo de 5 años contados desde la emisión de la sentencia, con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos de los y las hablantes de lenguas indígenas u originarias.

En consecuencia, es pertinente y está amparado por la Constitución que se modifique el artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la información solicitada por el peticionante le pueda ser entregada en su lengua originaria; habiéndose incluido en el texto sustitutorio propuesto que también le sea entregada la información en el idioma español; con el fin de evitar distorsiones y traducciones erróneas que pueda hacer el solicitante al momento de que pida que alguna persona o entidad le traduzca el texto que ha recibido en su lengua originaria al español.

- En cuanto a la modificación propuesta en el texto sustitutorio en relación al artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de señalar que el derecho de acceso a la información pública es reconocido como una facultad que permite a los ciudadanos contar con datos que obran en las entidades públicas; sin embargo, se puede señalar en que su proyección lo sitúa como un verdadero condicionante para otros derechos, tales como el ejercicio de la democracia participativa y el derecho a la libertad de expresión. Ello es así porque únicamente de contar con acceso a determinados datos es posible formarse una adecuada y real convicción de los acontecimientos y ejercer así una efectiva opinión pública libre, que garantice en último término la democracia

  El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a solicitar aquella información pública o de interés general que obre en archivos o bancos de datos de entidades públicas y que se le permita acceder a ella únicamente de asumir el costo que su reproducción pueda acarrear. Además, la eventual negación de los funcionarios de las entidades públicas de proporcionar dicha información solo podría basarse en razones expresas y claramente establecidas en la normativa que regula este derecho, y sobre la base de motivos legítimos como intimidad personal, seguridad nacional u otros criterios que vayan en la misma línea. De acuerdo con lo señalado, este derecho no cuenta con elementos de discrecionalidad para que se habilite su ejercicio, a diferencia del derecho de petición

comprendido en sentido estricto, no faculta a la divulgación de información veraz, como en el derecho a la libertad de información; o, de expresiones subjetivas, como en el derecho a la libertad de expresión, o a que se acceda a una base de datos sobre información sobre uno mismo.

La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce al derecho de acceso a la información pública, lo cual ha quedado reflejado en su artículo 2°, inciso 5:

> "Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional [...]".

Del análisis del antes referido precepto constitucional es posible deducir que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública lo pueden ejercer las personas naturales y jurídicas, al no formularse distinciones en el artículo constitucional, se encuentran facultadas para solicitar información y recibirla; el sujeto pasivo de dicha solicitud es toda entidad pública; la información debe ser remitida dentro del plazo que establezca la normativa legal pertinente; el solicitante debe asumir el costo que genere el satisfacer su pedido de información; se trata –al igual que ocurre con todos los derechos fundamentales- de un derecho que tiene límites; y, dichos límites serían impuestos por el derecho a la intimidad de personas ajenas a los solicitantes de la información, por motivos de seguridad nacional y finalmente se habilita a que la ley pueda estipular otros temas exentos del acceso público.

Es significativo señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública en ios siguientes términos:

> *"[...] La Constitución Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, [...] no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación de proveer la información solicitada. Pero es además otra característica del derecho en cuestión la ausencia de expresión de*

causa o justificación de la razón por la que se solicita la información, este carácter descarta la necesidad de justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o en la existencia de un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente inconstitucional [...]" [24]

Es únicamente con la entrada en vigor de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se produjo una regulación general, aplicable a todos los organismos públicos. El objetivo fue promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (artículo 1).

El referido texto normativo fue cuestionado por generar excesivas restricciones al ejercicio de este derecho. Para superar estos cuestionamientos (que planteaban que algunos de sus apartados fueran declarados contrarios a la Constitución), mediante la Ley 27927, el Congreso efectúa la modificación respectiva e incorpora algunos artículos en el referido dispositivo legal.

El texto que hoy se encuentra vigente es el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, el cual ya ha sido a su vez objeto de algunas modificaciones. Ahora bien, es preciso indicar que este texto normativo no ha incorporado artículo específico que desarrolle el contenido que tendría este derecho; sin embargo, sí ingresa a determinar los sujetos legitimados para ejercerlo, las entidades obligadas a permitir el acceso a su información, los límites válidos a su ejercicio (a través de las categorías de información secreta, reservada y confidencial).

Sin embargo, existe un vacío legal en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto no se señala si para solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública es exigible o no que el pedido sea suscrito por un abogado; lo cual puede originar que cuando la entidad pública no quiera proporcionar la información pedida, simplemente declare improcedente o inadmisible el pedido por no contar con la firma de abogado; siendo necesario por ello, con el fin de que no se limite este derecho, que se establezca claramente en la

[24] STC del expediente 950-2000-HD/TC, FJ 5.

normativa vigente que no será necesaria ni exigible la firma de abogado; tal como se está planteando en el texto sustitutorio propuesto.

En conclusión, en virtud a lo señalado por el Tribunal Constitucional y a los costos y tiempo que pueda demandar la entrada en vigencia en todo el país la propuesta de modificación del artículo 3 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha considerado incluir en el texto sustitutorio dos Disposiciones Complementarias Finales a fin de que este artículo entre en vigor progresivamente en todos los ministerios y entidades públicas, según el calendario que apruebe para dicho efecto la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley; y, que asimismo el Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo 007-2024-JUS, a las modificaciones dispuestas en la ley que se emita, en un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

VI. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

En ese sentido, la presente propuesta tiene impacto en el contenido normativo de los artículos 3 y 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyas propuestas de modificación se orientan a promover y facilitar el acceso a la información. A continuación se muestra el texto sustitutorio propuesto:

Cuadro 35
Cuadro comparativo del texto vigente y la propuesta normativa

Texto vigente de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Texto sustitutorio propuesto
Artículo 3.- Principio de Publicidad (...) Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización,	**"Artículo 3. Principio de publicidad** (...) Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización,

sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta ley. En consecuencia: (...) **3.** El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. (...)	sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta ley. En consecuencia: (...) **3.** El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. **Cuando la persona acredite que su único idioma es una lengua originaria, la entidad pública está en la obligación de entregar la información, tanto en castellano, como en dicha lengua originaria.**
Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.	**Artículo 7. Legitimación y requerimiento inmotivado** Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho, **ni firma de abogado."**
	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES **PRIMERA. Aplicación progresiva** Lo dispuesto en la modificación del artículo 3 —numeral 3— de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entra en vigor progresivamente en todos los ministerios y entidades públicas, según el calendario que apruebe para dicho efecto la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. **SEGUNDA. Adecuación del Reglamento** El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso

	a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo007-2024-JUS, a las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2024-2025.

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Los beneficios del texto normativo que se propone aprobar se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 36
Beneficios

Sujetos	Beneficios
Estado	**Respecto al artículo 3** • Mejora en la inclusión social: Al garantizar el acceso a la información en lenguas originarias, se promueve la inclusión social y se fortalece el respeto por la diversidad cultural, lo cual mejora y fortalece la presencia del Estado en la población. • Transparencia y confianza: La entrega de información accesible contribuirá a aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, mejorando así la relación entre el Estado y los ciudadanos. • Cumplimiento normativo: La propuesta ayuda al Estado a cumplir con compromisos internacionales relacionados con los derechos lingüísticos y culturales de las comunidades con lenguas originarias. **Respecto al artículo 7** • Mejorar la transparencia de la información pública y acerca el Estado al ciudadano. • Aumentar la confianza del público en las instituciones públicas promoviendo un ambiente más colaborativo entre el Estado y los ciudadanos.

Ciudadanía	**Respecto al artículo 3** • Acceso equitativo a la información pública: contribuye a garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lengua materna, tengan derecho a acceder a información pública esencial, promoviendo así una mayor equidad. • Empoderamiento cultural: Al fomentar el uso de lenguas originarias en contextos oficiales, se fortalece la identidad cultural y se empodera a las comunidades con leguas originarias. • Mejora de la participación ciudadana: Con un mejor acceso a la información, se espera un aumento en la participación ciudadana en procesos democráticos y decisiones políticas, lo cual es fundamental para una democracia saludable. **Respecto al artículo 7** • Se elimina barreras legales, lo que promueve el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía sin intermediarios. • Empoderamiento ciudadano: se promueve una participación más activa en los asuntos públicos del país.

Los costos o desventajas del texto normativo que se propone aprobar se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 37
Costos o desventajas

Sujetos	Costos o desventajas
Estado	**Respecto al artículo 3** • Costos administrativos: La implementación de la propuesta requerirá recursos adicionales para traducir documentos y capacitar personal en lenguas originarias, lo que puede incrementar los gastos operativos de las entidades públicas. • Inversión en tecnología: Se necesitará invertir en herramientas tecnológicas que faciliten la traducción y el acceso a la información en múltiples idiomas, lo que podría ser costoso. • Capacitación: Será necesario formar a los funcionarios públicos para que manejen adecuadamente las solicitudes de información en lenguas originarias, lo que implica un costo adicional en tiempo y recursos. **Respecto al artículo 7** • Incremento en la demanda de información, lo que podría generar una sobrecarga administrativa en las entidades públicas, requiriendo más recursos humanos y tiempo para procesar cada solicitud.

	• Desafíos en la gestión de solicitudes: sin un abogado que filtre las solicitudes, es probable que muchas estén mal formuladas, lo que podría disminuir la eficiencia en el manejo de información pública y generar confusión entre los funcionarios encargados.
Ciudadanía	**Respecto al artículo 3** • Posibles Retrasos en la Información: Si bien se busca mejorar el acceso a la información, la necesidad de traducir documentos podría generar retrasos en su entrega, afectando a quienes requieren información urgente. **Respecto al artículo 7** • Riesgo de pedidos improcedentes: sin asesoría legal adecuada, los ciudadanos podrían realizar pedidos que no se encuentran dentro del ámbito de la información pública.

VIII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución y Reglamento, como resultado del análisis respectivo, y de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, propone la **APROBACIÓN** de los proyectos de ley 1974/2021-CR, 2261/2021-CR, 3841/2022-CR, 4046/2022-CR, 4522/2022-CR, 5429/2023-CR, 5602/2022-CR, 5697/2023-CR, 6002/2023-CR, 6011/2023-CR, 6013/2023-CR, 6041/2023-CR, 6156/2023-CR, 6157/2023-CR, 6405/2023-CR, 6483/2023-CR, 6484/2023-CR, 6631/2023-CR, 7077/2023-CR, 7412/2023-CR Y 8066/2023-CR, con el siguiente **TEXTO SUSTITUTORIO**:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27806,
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PARA FORTALECER SU APLICACIÓN Y EFICACIA

Artículo único. Modificación de los artículos 3 y 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se modifican el artículo 3 —numeral 3— y el artículo 7 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual queda redactada en los siguientes términos:

"Artículo 3. Principio de publicidad

[...]

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta ley.

En consecuencia:

[...]

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. **Cuando la persona acredite que su único idioma es una lengua originaria, la entidad pública está en la obligación de entregar la información, tanto en castellano, como en dicha lengua originaria.**

Artículo 7. Legitimación y requerimiento inmotivado

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho, **ni firma de abogado.**"

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Aplicación progresiva

Lo dispuesto en la modificación del artículo 3 —numeral 3— de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entra en vigor progresivamente en todos los ministerios y entidades públicas, según el calendario que apruebe para dicho efecto la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.

SEGUNDA. Adecuación del Reglamento

El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo 007-2024-JUS, a las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1974/2021-CR, 2261/2021-CR, 3841/2022-CR, 4046/2022-CR, 4522/2022-CR, 5429/2023-CR, 5602/2022-CR, 5697/2023-CR, 6002/2023-CR, 6011/2023-CR, 6013/2023-CR, 6041/2023-CR, 6156/2023-CR, 6157/2023-CR, 6405/2023-CR, 6483/2023-CR, 6484/2023-CR, 6631/2023-CR, 7077/2023-CR, 7412/2023-CR Y 8066/2023-CR, LEY QUE MODIFICA LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA FORTALECER SU APLICACIÓN Y EFICACIA

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JOSE LUIS ELIAS AVALOS
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2024 19:47:10-0500

Dese cuenta,
Sala de Sesiones
19 de noviembre de 2024.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ROSPIGLIOSI CAPURRO Fernando Miguel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2024 10:37:44-0500

FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO
Presidente
Comisión de Constitución y Reglamento

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2024 18:55:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2024 19:35:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2024 20:29:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RAMIREZ Alex Randy FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 18:31:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2024 17:04:55-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CUTIPA CCAMA Victor Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 12:26:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/11/2024 10:46:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2024 19:09:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/11/2024 08:34:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUIROZ BARBOZA Segundo Teodomiro FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/11/2024 16:36:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAMONES SORIANO Lady Mercedes FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2024 09:13:24-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/11/2024 17:41:27-0500

Firmado digitalmente por: ARAGON CARREÑO Luis Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2024 17:22:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: WILLIAMS ZAPATA Jose Daniel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/11/2024 14:08:57-0500

DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1974/2021-CR, 2261/2021-CR, 3841/2022-CR, 4046/2022-CR, 4522/2022-CR, 5429/2023-CR, 5602/2022-CR, 5697/2023-CR, 6002/2023-CR, 6011/2023-CR, 6013/2023-CR, 6041/2023-CR, 6156/2023-CR, 6157/2023-CR, 6405/2023-CR, 6483/2023-CR, 6484/2023-CR, 6631/2023-CR, 7077/2023-CR, 7412/2023-CR Y 8066/2023-CR, LEY QUE MODIFICA LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA FORTALECER SU APLICACIÓN Y EFICACIA

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ CALLE Heidy Lisbeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 12:58:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LUQUE IBARRA Ruth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 11:03:31-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MITA ALANOCA Isaac FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 15:55:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 15:27:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CALLE LOBATON Digna FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 09:49:01-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 16:30:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA Jorge Alfonso FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/11/2024 10:59:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TELLO MONTES Nivardo Edgar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 16:45:05-0500

MP Dictamenes

De: Notificacion Sistemas
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2024 11:55
Para: Elsa Mirella Portugal Sanchez; mp.interno
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 9bbd15fc5584721677d6b934ea24b144.pdf

[Solicitante]: eportugal@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: SE REMITE DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1974/2021-CR, 2261/2021-CR, 3841/2022-CR, 4046/2022-CR, 4522/2022-CR, 5429/2023-CR, 5602/2022-CR, 5697/2023-CR, 6002/2023-CR, 6011/2023-CR, 6013/2023-CR, 6041/2023-CR, 6156/2023-CR, 6157/2023-CR, 6405/2023-CR, 6483/2023-CR, 6484/2023-CR, 6631/2023-CR, 7077/2023-CR, 7412/2023-CR Y 8066/2023-CR, LEY QUE MODIFICA LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA FORTALECER SU APLICACIÓN Y EFICACIA. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ACORDÓ LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ACTA PARA EJECUTAR ACUERDOS ADOPTADOS
[Fecha]: 2024-11-28 11:55:24
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.